



# LOS LAICOS Y LA POTESTAD DE RÉGIMEN EN LOS TRABAJOS DE REFORMA CODICIAL: UNA CUESTIÓN CONTROVERTIDA

EMILIO MALUMBRES

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.—2. LOS PRIMEROS TRABAJOS DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO. 2.1. Coetus «De Processibus». 2.2. Coetus «De Sacra Hierarchia». 2.2.1. La primera sesión. 2.2.2. Primeras conclusiones. 2.3. Coetus «De fidelium iuribus et associationibus deque laicis». 2.4. Coetus «De procedura administrativa».—3. REVISIÓN DEL PROYECTO DE LEY FUNDAMENTAL. 3.1. Sesiones IX y X. 3.1.1. El laico y los «munera Ecclesiae». 3.1.2. El laico y el «munus regendi». 3.1.3. La consulta a la S.C. para la Doctrina de la Fe. 3.2 El último estudio de los cánones.—4. REVISIÓN DE LOS ESQUEMAS 1977 Y ANTERIORES. 4.1. Sacerdocio común y ministerial. 4.2. El juez laico en el tribunal colegial. 4.3. Oficios reservados a los clérigos.—5. REVISIÓN DEL ESQUEMA 1980. 5.1. La Relatio de 1981. 5.1.1. El laico, el clérigo y la potestad de régimen. 5.1.2. El juez laico. 5.1.3. El voto de A. Stickler. 5.1.4. Observaciones a la sistemática. 5.2. La sesión Plenaria. 5.2.1. La decisión de la Plenaria. 5.2.2. Análisis de los cambios.—6. REVISIÓN DEL ESQUEMA 1982. 6.1. Intervención personal de S.S. Juan Pablo II. 6.2. Análisis de los cambios.—7. CONCLUSIÓN. 7.1. Visión de conjunto. 7.2. Consideraciones finales. 7.3. Cuadro esquemático de las modificaciones de los cánones.

## 1. INTRODUCCIÓN

Se ha puesto de manifiesto, acertadamente, que «los problemas más difíciles del Derecho constitucional canónico están en conexión con la precisa determinación de las relaciones entre poder eclesial y modalidades en la participación del sacerdocio de Cristo»<sup>1</sup>. En concreto, la posible participación de fieles no ordenados en el ejercicio de la potestad de régimen constituye una compleja cuestión aún

1. P. LOMBARDÍA, *Lecciones de Derecho Canónico*, Madrid 1984, p. 87.

no totalmente resuelta y notoriamente controvertida durante el proceso de elaboración del nuevo Código.

Sin pretender resolverla en estas páginas, pero conscientes de que el análisis de lo sucedido en los casi veinte años que duraron las tareas de la reforma codicial constituye un presupuesto ineludible para la correcta interpretación de la vigente legislación canónica, nos ha parecido oportuno recoger sistemáticamente la evolución de los cánones más directamente relacionados con ella.

Siendo este el objeto de nuestro estudio, la revista *Communications* ha constituido nuestra principal fuente de información<sup>2</sup>. El trabajo viene completado con datos de interés hallados en otras publicaciones y enriquecido con afirmaciones de algunos Consultores y miembros de la Comisión especialmente significativos. Al final, tras la visión de conjunto, añadimos unas breves consideraciones personales.

## 2. LOS PRIMEROS TRABAJOS DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO

Como es sabido las tareas de revisión, divididas según materias, fueron encomendadas a distintos *coetus* de Consultores. Analizaremos sus trabajos siguiendo, principalmente, un orden cronológico.

Presentamos sólo lo directamente relacionado con el posible ejercicio por parte del fiel laico de la potestad de régimen; nada diremos de los interesantes trabajos del grupo de estudio «*De ordinatione systematica*» que, por lo publicado en *Communications*, parecen no haber tratado esta cuestión específicamente<sup>3</sup>.

### 2.1. *Coetus «De processibus»*

En 1966, como fruto de las primeras sesiones de revisión del Código de 1917, este grupo de estudio propuso, entre otras, la siguiente innovación:

«Iudex quoque de merito renuntiari poterit laicus, non quidem unicus, sed unus de collegio in causis nullitatis matrimo-

2. El último número consultado ha sido el de 1984.

3. Cfr. *Comm.*, 1 (1969), pp. 101-113.

nii in primo gradu agendis, ex indulto Conferentiae Episcopalis, quando nec in tribunali regionali collegium trium iudicum clericorum efformari poterit»<sup>4</sup>.

Tal propuesta suponía un notable cambio. En 1918 se había consultado a la Sagrada Congregación del Concilio «utrum permittere debeat quod in tribunalibus ecclesiasticis partem habeant cum voto deliberativo in causis matrimonialibus et contentiosis (exclusis utique criminalibus) iurisperiti laici, iuxta praxim quae ibi dicitur vigere ex consuetudine 170 annorum»<sup>5</sup>. La respuesta fue clarísima: «nullatenus esse legitimam nec in posterum tolerandam consuetudinem admittendi laicos tamquam veros iudices cum voto deliberativo»<sup>6</sup>. Tal costumbre «non aliud mereri nomen nisi abusus»<sup>7</sup>.

Las razones aducidas fueron muchas; a nosotros nos interesa la siguiente: «laici iurisdictionem ecclesiasticam, quae necessaria est ad decidendas causas ecclesiasticas, habent nullam, immo nec illius quidem habendae sunt capaces, sed prorsus incapaces»<sup>8</sup>. La Sagrada Congregación, en conformidad con el c. 118 del Código entonces vigente, afirmaba la incapacidad del laico para ser juez, ya que suponía ejercicio de la potestad de jurisdicción. Y sin embargo añadía «talis incapacitas solum per specialem et extraordinariam Rom. Pontificis provisionem in causa particulari auferri possit (Cfr. Schmalzgr., I, tit. XXIX, n. 14; II, tit. I, n. 83 § 1)»<sup>9</sup>.

Esa especial provisión por parte del Romano Pontífice sólo es justificable si se acepta en el bautizado la capacidad de juzgar causas espirituales. Aquella incapacidad, que la misma congregación del Concilio había calificado de «absoluta», no sería más que una incapacidad establecida por el derecho.

Los motivos de la innovación y el modo en que se hacía eran, con palabras del grupo de estudio, los siguientes:

«Capacitas laicorum ad munus iudiciale ex plenitudine potestatis Summi Pontificis iam admittitur a classicis Canonistis (Reiffenstuel, Schmalzgrueber). A Concilio Vat. II provenit invitamentum ut laici 'at quaedam munera ecclesiastica, ad fi-

4. Comm., 2 (1970), p. 184. Aquí mismo se afirmaba que las innovaciones «redolent spiritum Concilii Vaticani». Para conocer la composición del *coetus* cfr. Comm., 5 (1973), p. 193.

5. AAS, 11 (1919), p. 128.

6. *Ibidem*, p. 129.

7. *Ibidem*, p. 131.

8. *Ibidem*, p. 129.

9. *Ibidem*, p. 129.

nem spiritualem exercendum, ab Hierarchia adsumantur'. Norma proposita continet indubitanter novationem sat gravem. Ast dispositio multis cautionibus est circumscripta: Quando nec in tribunali regionali collegium trium iudicum clericorum efformari possit, Conferentia Episcopalis facultate instruitur permittendi in primo gradu constitutionem collegii ex duobus clericis et uno viro laico; et, si id quoque incassum cesserit, demandandi causas nullitatis matrimonii clerico tamquam iudici unico»<sup>10</sup>.

Para que tal innovación se presentara tuvo que contar con el apoyo mayoritario de los Consultores. Así, y sólo a título de ejemplo, podemos señalar que uno de los miembros del *coetus*, bastantes años atrás, había escrito: «incapacitas laicorum habendi iurisdictionem ecclesiasticam (can. 118) non habet causam immediatam in iure divino, sed in iure ecclesiastico; ex iure divino laici *caerent* quidem ecclesiastica iurisdictione, sed ipsa *incapaces* non sunt. Potest igitur Summus Pontifex tum officium ecclesiasticum stricte dictum (can. 145) tum a fortiori iurisdictionem delegatam laicis quoque, saltem in casibus particularibus, conferre»<sup>11</sup>.

La aparición en mayo de 1971, del M. P. *Causas matrimoniales* demostró la aceptación de aquel planteamiento. El Papa Pablo VI lo hacía propio y dispuso, en términos casi idénticos a los previstos por el *coetus*, que:

«V. § 1. Si nec in Tribunali dioecesano nec in Tribunali regionali, ubi erectum sit, collegium trium iudicum clericorum efformari possit, Conferentia Episcopalis facultate instruitur permittendi in primo et secundo gradu constitutionem collegii ex duobus clericis et uno viro laico.

§ 2. In primo gradu, cum nec per aggregationem viri laici collegium de quo in § 1 efformari possit, singulis in casibus causae nullitatis matrimonii clerico tamquam iudici unico per eandem Episcopalem Conferentiam demandari possunt. Qui iudex, ubi fieri possit, assessorem et auditorem in iudicio sibi asciscat»<sup>12</sup>.

10. Comm., 2 (1970), p. 189.

11. P. CIPROTTI, *De iurisdictione in causas matrimoniales*, en «Antonianum», 12 (1937), p. 55.

12. M.P. *Causas matrimoniales* AAS 63 (1971), p. 443. Las normas en él establecidas tenían que ser «fideliter servandas, donec novus Codex Iuris Canonici promulgetur» (*Ibidem*, p. 442). El futuro Código podía haber suprimido

En 1976 este grupo de estudio enviaría a consulta su primer esquema. La participación del laico como juez en tribunales eclesiásticos quedaba establecida en los siguientes términos:

C. 20 (CIC 1574) § 1. In dioecesi constituentur ab Episcopo iudices dioecesani qui sint clerici. Necessitate suadente potest Conferentia Episcopalis permittere ut collegium iudicans constet ex uno viro laico et ceteris clericis.

§ 2. Iudices sint integrae famaе et in iure canonico periti<sup>13</sup>.

A diferencia de lo establecido en el M. P. de Pablo VI, la participación del laico no quedaba reducida a las causas matrimoniales.

## 2.2. *Coetus «De Sacra Hierarchia»*

### 2.21. *La primera sesión*

En esta sesión, celebrada en los últimos días de octubre de 1966, se discutió la validez del entonces vigente c. 118: «Soli clerici possunt potestatem sive ordinis sive iurisdictionis ecclesiasticae et beneficia ac pensiones ecclesiasticas obtinere». El secretario adjunto expuso las opiniones que los miembros del *coetus* habían manifestado en sus votos escritos:

«Conveniunt omnes textum, uti iacet in Codice, servari non posse. Re quidem vera:

a) Sunt laici qui, in totali servitio cum sint alicuius Ecclesiae, ius habent ad pensiones ecclesiasticas;

b) De beneficiis sermo non fieri debet, ergo nec de iure ad beneficia obtinenda, quia beneficia ut accessoria ad officia habenda sunt;

c) Certum est solos clericos potestatem ordinis proprie

esa participación del laico y, sin embargo, a pesar de la oposición de algunos autores —recogemos sus opiniones a lo largo del trabajo—, no lo haría.

Conviene señalar que, con anterioridad al *Causas matrimoniales*, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica en sus *Normae pro Tribunalibus inter-dioecesanis vel regionalibus aut interregionalibus* del 28 de diciembre de 1970, ya había afirmado que los jueces *ordinarie* habrían de ser sacerdotes (cfr. AAS, 63, (1971), pp. 486-492).

13. Comm., 10 (1978), p. 231.

dictam exercere posse, quia soli clerici per ordinationem hanc possident potestatem;

d) Ad potestatem iurisdictionis quod attinet, laici, si ita disponit hierarchia, partem habere possunt in eiusdem exercitio»<sup>14</sup>.

Se presentaron entonces las diversas opiniones acerca del canon:

a) podía servir sólo en relación con los oficios, pero no con los beneficios;

b) puede mantenerse; pero, sólo en relación con la potestad de orden y de jurisdicción;

c) sería conveniente distinguir «inter officia fundata in iure divino vel characterem praevalenter pastorem habentia et officia quae secum ferunt functionem solummodo technicam»;

d) mejor si se dice «soli clerici possunt potestatem sacram obtinere»<sup>15</sup>.

Esta última fórmula, como otra que comenzaba diciendo «licet et laicis quaedam concedi possit participatio in exercitio ordinis et iurisdictionis, soli tamen clerici possunt veram ac propriam potestatem...» (en *Communicationes* la frase termina así), se consideraron excesivamente generales e indeterminadas, por lo que se propuso la siguiente redacción: «Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas iurisdictionis ecclesiasticae ordine sacro innixa»<sup>16</sup>.

La redacción propuesta puede entenderse como una forma de recoger la distinción, hecha por uno de los consultores, entre oficios de derecho divino y prevalentemente pastorales, y otros oficios que suponen una función más técnica. Los primeros quedan reservados a los ordenados, los otros —aunque conlleven algún ejercicio de la potestad de régimen—, podría atribuirse a los laicos.

El fundamento de esta modificación del c. 118 lo encontramos en el resumen que el secretario adjunto hizo del parecer mayoritario de los Consultores. Se mantenía la tradicional doctrina del diverso origen de las potestades de orden y jurisdicción y se aceptaba la posibilidad de que la Jerarquía permitiera a los laicos tener parte en el

14. Comm., 16 (1984), p. 168. Para conocer la composición del *coetus* cfr. Comm., 5 (1973), p. 190.

15. Comm., 16 (1984), p. 169.

16. *Ibidem*, p. 169.

ejercicio de esta última. Aunque no nos detendremos en ello, la historia de la Iglesia presenta hechos en los que esta posibilidad se ha llevado a la práctica<sup>17</sup>.

En definitiva, se estaba aceptando una posible separación del orden y la jurisdicción en cuanto que no todo ejercicio de ésta requiere, necesariamente, haber recibido el Orden sagrado. No pocos autores habían mantenido que parte del contenido del c. 118 no constituía más que un precepto de derecho eclesiástico<sup>18</sup>.

Sin embargo no todos compartían tal planteamiento. En *Communicationes* leemos que el nuevo texto del c. 118 no termina de aceptarse por uno de los Consultores, que propone como redacción: «*soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas sacra*»<sup>19</sup>.

Nos encontramos con la expresión conciliar *sacra potestas* que refleja, en la opinión de numerosos autores, la íntima unidad e inseparabilidad de las potestades de orden y de jurisdicción. K. Mörsdorf, presente en el *coetus*, siempre ha defendido la complementariedad de ambas potestades<sup>20</sup>. En virtud de esa inseparable unidad ha afirmado: «fundamentalmente sólo aquellos que poseen el orden pueden recibir la potestad de jurisdicción»<sup>21</sup>, y así, «es este el sentido teológico más

17. Algunos ejemplos aparecerán a lo largo del trabajo. El estudio de cada uno de ellos supone una labor muy interesante pero que, por su dificultad y extensión, no podremos realizar en estas líneas.

18. Cfr. entre otros, F. MAROTO, *Instituciones de Derecho Canónico II*, Madrid 1919, p. 266; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici I*, Taurini 1928, p. 196; A. BERTOLA, *La costituzione della chiesa*, 3.ª ed. Torino 1958, p. 286; F. M. CAPELLO, *Summa iuris canonici I*, 6.ª ed. Roma 1961, p. 241; F. X. WERNZ, *Ius Canonicum II*, Editio altera, Roma 1928, p. 51; I. CHELODI, *Ius canonicum de personis*, 4.ª ed. Vicenza 1957, p. 183 nota 2 y p. 208.

19. *Comm.*, 16 (1984), p. 169.

20. La importancia del trabajo realizado por este prestigioso canonista podemos resumirla con palabras de A. Cattaneo: «Característica de la doctrina de Mörsdorf es el esfuerzo especulativo realizado por penetrar en la comprensión del binomio orden-jurisdicción, que caracteriza la *sacra potestas* en su núcleo más profundo. No se trata evidentemente sólo de reconocer que orden y jurisdicción se complementan mutuamente, este hecho es, y era en la época en que aparecen sus primeros artículos, doctrina más o menos común, sino —y en esto reside la aportación de nuestro Autor— de dar una explicación coherente de esta «bipolaridad», enucleándola de la naturaleza propia de la Iglesia como realidad compleja, 'quae humano et divino coalescit elemento' (LG 8, a)». A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di K. Mörsdorf*, Pamplona 1986, pp. 366 s.

21. K. MOERSDORF, *Rechtsprechung und Verwaltung im kanonischen Recht*, Freiburg i.Br. 1941, p. 2. (La traducción del alemán en este y otros casos, es nuestra).

profundo de la afirmación de que sólo los clérigos pueden recibir la potestad de orden y de jurisdicción (c. 118)»<sup>22</sup>.

Es lógico que, al menos él, fuera partidario de modificar el canon sólo en el sentido de reflejar la unidad de las potestades, y no para dar cabida a los laicos en el ejercicio de la jurisdicción. Respecto a esta cuestión ha escrito mucho, y siempre con la intención de evitar un oscurecimiento de lo que supone el Orden sagrado, y cualquier disminución de la diferencia esencial que existe entre clérigos y laicos. Vale la pena recoger otras palabras suyas: «Con el sacramento del Orden tiene lugar una elección entre los miembros del Pueblo de Dios que fundamenta la distinción entre clérigos y laicos. El Orden Sagrado confiere un carácter indeleble que se añade al ya recibido en el Bautismo y la Confirmación. La distinción entre clérigos y laicos proviene de esta distinta configuración personal. El clérigo se ha vuelto idóneo para representar a la Cabeza invisible de la Iglesia y por tanto a presidir una comunidad de la Iglesia en calidad de cabeza. El orden está por tanto íntimamente orientado hacia la jurisdicción, sin proporcionar, sin embargo, todavía ninguna posición concreta como pastor. El laico no tiene la configuración personal necesaria para poder ser pastor; no puede por tanto revestirse, en el Pueblo de Dios estructurado jerárquicamente, de la función de cabeza. En este hecho consiste la íntima unión entre la jerarquía de orden y la de jurisdicción como la barrera insuperable para la participación del laico en los poderes provenientes de la jurisdicción. En este sentido los papeles del clérigo y del laico no son intercambiables»<sup>23</sup>.

En *Communicationes* leemos que ante la disparidad de opiniones, «haesitant membra coetus, sed *provisorie* admittunt priorem textum» (aquel que reservaba a los clérigos también los oficios para los que se requiera *potestas iurisdictionis ecclesiasticae ordine sacro innixa*). Se opuso un solo Consultor que rogó figurara en la *relatio* de la sesión su opinión contraria. «In fine admissum est quaestionem iterum studio submittendam esse»<sup>24</sup>.

Ese posterior estudio no ha aparecido publicado; en cualquier caso, no cambió el texto ahora aprobado pues es el que encontraremos en el esquema de 1977, como c. 128.

22. IDEM, *Die Stellung der Laien in der Kirche*, en «Revue de Droit Canonique», 11 (1960), p. 224.

23. IDEM, *Lehrbuch des Kirchenrechts I*, 11 ed. Paderborn 1964, pp. 558-559.

24. Comm., 16 (1984), p. 169.

### 2.2.2. *Primeras conclusiones*

Del escrito que informaba de los trabajos de este *coetus (opera Consultorum in parandis canonum schematibus)* entresacamos las siguientes afirmaciones:

a) Ni todo oficio eclesiástico, ni todo ejercicio de la potestad de régimen quedan reservados a los clérigos:

«Re quidem vera, secundum Decretum Concilii Vaticani II Presbyterorum Ordinis officium ecclesiasticum 'deinceps intellegi debet quodlibet munus stabiliter collatum in finem spirituales exercendum'. Quaedam igitur officia quae laicis committuntur, uti v.g. est institutio religiosa tradenda, dici debent officia ecclesiastica. Officia itaque ecclesiastica non reservantur clericis. Similiter clericis non reservatur hodie exercitium omnis potestatis regiminis seu iurisdictionis in Ecclesia. Admittitur enim hodie Episcoporum Conferentiam regionis instrui facultate permittendi, certis sub conditionibus, constitutionem, in primo gradu iudici, collegii ex duobus clericis et uno laico constantis. Qui laicus, utpote membrum collegii iudicialis, certius potestatem regiminis iudicalem seu iurisdictionem exercet»<sup>25</sup>.

b) De lo anterior se deduce la conveniencia de un cambio en la sistemática. También se vería oportuno cambiar el *coetus* encargado del estudio de lo referente a la potestad de régimen y al oficio:

«Quare tituli in quibus normae traduntur de officiis ecclesiasticis et de potestate ordinaria vel delegata, proprium locum non habent in Parte Codicis, quae de clericis tractat. Praeterea, indoles generalis materiae horum titulorum requirere videtur ut ponantur sub generali aliqua rubrica, scilicet sub rubrica de normis generalibus aut sub rubrica de personis in genere. Itaque recognitio canonum qui praescripta tradunt de officiis ecclesiasticis atque de exercitio potestatis regiminis ab alio apparatus coetu studiorum, scilicet a 'Coetu studiorum de personis physicis et moralibus', cuius ceterum studio commissae sunt quaestiones indolem specificè iuridicam habentes»<sup>26</sup>.

25. Comm., 3 (1971), p. 187.

26. *Ibidem*, pp. 187-188. El cambio de grupo de estudio no tardó en llevarse a la práctica (cfr. Comm., 6 (1974), p. 56).

En relación con la sistemática sólo decir que en el esquema del 1977 ya

## c) Se modifica el c. 118:

«In Codice I.C., canon 118 enuntiat normam absolutam, vi cuius 'soli clerici possunt potestatem sive ordinis sive iurisdictionis ecclesiasticae et beneficia ac pensiones ecclesiasticas obtinere'. De omnium consultorum sententia, sermo fieri non debet de beneficiis, de iure scilicet clericorum ad beneficia ecclesiastica obtinenda, quia beneficia tantummodo ut accessoria ad officia habenda sunt. Sed nec statui potest solos clericos esse habiles qui potestatem iurisdictionis obtineant. Hodie enim, uti supra dictum iam est, potestas aliqua iurisdictionalis conceditur laicis. Itaque in coetu studiorum admissa est propositio, sed uti propositio provisoria alicuius normae tantum, cuius ratione 'soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas iurisdictionis ecclesiasticae in ordine sacro innixa'. Verumtamen, haec norma est nimis indeterminata. Ut autem norma magis determinata proponi valeat, dirimere debet suprema Ecclesiae auctoritas quaestionem quousque potestas regiminis seu iurisdictionis committi possit christifidelibus laicis. Hac enim quaestione soluta, definiri potest quanam potestas regiminis reservatur clericis, quanamque officia ecclesiastica solis clericis committi possunt»<sup>27</sup>.

Entre las discusiones de 1966 y estas palabras de 1971 había aparecido el M.P. *Causas matrimoniales*. De aquí, la firmeza de la expresión «laicus, utpote membrum collegii iudicialis, certocertius potestatem regiminis iudicalem seu iurisdictionem exercet».

La cuestión, ahora parece centrarse en saber hasta qué límite —*quousque*— puede concederse potestad de jurisdicción al laico.

### 2.3. *Coetus «De fidelium iuribus et associationibus deque laicis»*

En las primeras sesiones de este grupo de estudio se recordaron aquellas enseñanzas conciliares que habían de dirigir la nueva configuración del estatuto jurídico del fiel y del laico<sup>28</sup>.

figuraba lo relativo al ejercicio de la potestad de régimen y a los oficios eclesiásticos en el Libro I «De las normas generales» (cfr. Comm., 9 (1977), pp. 234-235 y 244).

27. Comm., 3 (1971), p. 195.

28. Cfr. *Opera Consultorum in parandis canonum Schematibus*, Comm. 2 (1970), pp. 89-98.

Teniendo en cuenta el principio inspirador n. 6<sup>29</sup>, en el que se reafirmaba la radical igualdad de todos los fieles y la diversidad de funciones que a cada uno compete, este *coetus* afirmó:

a) «Dum ex una parte servatur hierarchica structura quae ex voluntate Dei ad Ecclesiam pertinet, vitatur ex altera parte visio stratificata membrorum Populi Dei, quae a non paucis considerata est unus ex praecipuis defectibus systematicis in Codice nunc vigente, quaeque longe superata est a Concilio Vaticano II. Ius canonicum plene fiat oportet ius Populi Dei, ius nempe quod dirigat ac promoveat vitam totius communitatis ecclesialis, attenta non solum diversitate functionali fidelium, sed etiam eorum radicali aequalitate».

b) «Multa quae ad laicos spectant in Codice venire debent non sub titulo de laicis, sed aliis in locis. Sic, ex. gr., laici ius habent ad pastorem curam recipiendam, quae respondeat eorum peculiari conditioni ac necessitatibus, itemque facultate gaudent ad munera ecclesiastica gerenda quae sacerdotium ministeriale non requirunt, cuiusmodi sunt munera iudicis in tribunalibus ecclesiasticis, membri vel consultoris in organis a hierarchia constitutis aliaque id genus»<sup>30</sup>.

En la opinión de este *coetus*, quedando siempre a salvo la estructura jerárquica de la Iglesia, existen oficios eclesiásticos que suponen el ejercicio de la potestad de régimen y sin embargo no requieren el sacerdocio ministerial. Como ejemplo se cita entre otros, el de juez en tribunal colegial; no parece que el estar ordenado sea una condición esencial para poder juzgar causas eclesiásticas. El laico podrá hacerlo si reúne las condiciones debidas, de ciencia, pericia, formación, etc.<sup>31</sup>.

#### 2.4. *Coetus «De procedura administrativa»*

Una de las innovaciones propuestas por este grupo de estudio consistía en lo siguiente: «facultas datur permittendi, in tribunali ad-

29. Cfr. Comm., 1 (1969), pp. 82-83. Como es sabido fue una Comisión de Consultores la que elaboró unos principios que permitieran a los distintos grupos de estudio realizar la tarea de revisión de una manera orgánica. Pablo VI quiso que esos principios fueran sometidos al estudio del Sínodo de Obispos y por éste fueron aprobados en octubre de 1967.

30. Comm., 2 (1970), pp. 95-96.

31. En términos muy parecidos se expresaría, ocho años después, la Pon-

ministrativo, certis in casibus, aggregationem unius iudicis qui sit diaconus vel vir laicus»<sup>32</sup>.

Efectivamente, en el esquema enviado a consulta en 1972 se encontraba el c. 22 § 4 que decía:

«Iudices et Promotor Iustitiae sint idonei sacerdotes, qui in decreto ferendo vel in recursibus proponendis vel iudicandis nullam partem habuerint, neque ad eam dioecesim pertineant in qua decretum latum est; necessitate suadente potest unus ex tribunalis collegialis iudicibus esse idoneus diaconus, vel etiam laicus, nisi iudicandum sit de recursu adversus decretum ab Episcopo latum»<sup>33</sup>.

En este apartado, por la escasa información que presenta *Communicationes*, recogeremos la evolución de este canon. Así, en su primera revisión, se diría:

«De diaconis vel laicis admittendis haec animadversa sunt (nonnulla autem inter se pugnant):

a) ut admittatur etiam collegium quod constet ex sacerdote et duobus diaconis vel laicis, vel ex iudice unico sacerdote cum duobus assessoribus laicis;

b) ut non debeat haberi 'necessitas', sed in quolibet casu possit iudex laicus nominari;

c) ut admittantur diaconus et laicus etiam ubi debeat iudicari de decreto ab episcopo lato;

e) ut numquam diaconus vel laicus possit esse iudex»<sup>34</sup>.

No aparece en *Communicationes* el análisis de tales propuestas. El canon sí sufriría modificaciones<sup>35</sup>. En estas líneas sólo hemos querido señalar la tendencia de aceptar al laico como juez eclesiástico.

### 3. REVISIÓN DEL PROYECTO DE LEY FUNDAMENTAL

Mucho se ha escrito sobre el alcance y la importancia de esta proyectada Ley Fundamental. En este apartado nos limitaremos, ex-

tificia Comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico Oriental. (Cfr. *Enchiridion Vaticanum*, 5 (1974-1976), pp. 159-161).

32. *Comm.*, 4 (1972), p. 37. Hacemos notar que los trabajos de este *coetus* fueron posteriores a la aparición del M.P. *Causas matrimoniales*.

33. *Schema canonum de procedura administrativa*, Typis polyglottis vaticanis, 1972, p. 15.

34. *Comm.*, 5 (1973), pp. 242-243.

35. En el esquema de 1980 no se aceptaban ni al diácono ni al laico como

clusivamente, a analizar la información que *Communicationes* ofrece de las tareas de revisión de algunos de sus cánones.

### 3.1. Sesiones IX y X<sup>36</sup>

#### 3.1.1. *El laico y los «munera Ecclesiae»*

C. 55. § 1. Qui in muneribus Ecclesiae explendis partem habent verum adimplent ministerium in servitium populi Dei, ad cuius bonum spirituale promovendum potestatem qua ideo donantur sacram exercent.

§ 2. Ad haec munera adimplenda constituti sunt imprimis Episcopi, quippe qui consecrati sint ut Ipsius Christi Magistri, Pastoris ac Pontificis, partes sustineant et in Eius persona agant, in communionem hierarchicam cum Collegii Episcoporum Capite et membris.

§ 3. Haec munera etiam pro sua parte adimplent Presbyteri, quippe qui, ut Ordinis episcopalis cooperatores et ipsi Christi ministerium exercent, Eius personam gerentes; Episcopis et Presbyteris, in his muneribus explendis, inserviunt diaconi.

§ 4. Christifideles, quippe qui baptismo Christo incorporati et de munere Christi sacerdotali, prophetico et regali suo

jueces en tribunales administrativos. El c. 1692 establecía: «Iudices et promotor iustitiae in tribunalibus administrativis sint idonei sacerdotes, qui in decreto ferendo vel in recursibus adversus ipsum proponendis vel iudicandis nullam partem habuerint: ii autem, qui ad eam dioecesim pertineant, in qua decretum latum est, non possunt iudices esse».

En 1981 se hizo la siguiente propuesta: «Non exigatur ut iudices semper sint sacerdotes; admittantur etiam diaconi, immo et aliquando, de licentia Episcoporum Conferentiae, ut coniudices in tribunali collegiali admittantur quoque laici. Permittatur etiam ut promotores iustitiae sint 'sive clerici sive laici'» (Comm., 14 (1982), p. 87), que sería rechazada en los siguientes términos: «Dedecet. Agitur enim de iudicandis actibus potestatis exsecutivae Episcoporum. Hoc revera esset contra indubitam 'canonicam traditionem'» (*Ibidem*, p. 87). En la respuesta, cabe sin embargo señalar, no se aduce como motivo el que se ejerciera potestad de régimen.

El c. 1692 de 1980 pasó, sin modificaciones, a ser el c. 1740 del esquema 1982, que no se incorporaría al Código.

36. Celebradas en marzo de 1975 y febrero de 1976 respectivamente. Para conocer la composición del *coetus* encargado de la revisión cfr. Comm., 8 (1976), pp. 78-79.

modo participes facti sint, propriam sibi quoque in iisdem muneribus implendis partem habent<sup>37</sup>.

Del canon nos interesa principalmente el último de los párrafos, y sólo recogemos —entre las observaciones a él referidas— aquellas que reflejan el núcleo de la cuestión que nos ocupa:

a) Un Consultor opina que «non potest laicis negari participatio in munere prophetico, sacerdotali et regali, quae munera differunt quoad intensitatem a muneribus docendi, sanctificandi et regendi: sed laici quandoque accipere possunt a sacra Hierarchia veram potestatem (cf. Const. *Lumen gentium*, n. 33), ex. gr. qua iudices in ecclesiasticis tribunalibus, ergo exercere valent veram iurisdictionem»<sup>38</sup>.

b) Con esta última afirmación «non concordat aliquis, qui censeat veram potestatem sacram necessario exigere ordinationem»<sup>39</sup>.

c) Y esto, para otro, debe matizarse ya que «notio muneris non identificatur cum potestate; structura hierarchica est semper sacramentalis, sed non semper facultas aliqua transmittitur via sacramentali: confundendum non est fundamentum sacramentale cum radice sacramentali potestatis»<sup>40</sup>.

Estas dos últimas intervenciones podemos entenderlas mejor si recordamos algunas afirmaciones de dos consultores, W. Bertrams y P. Lombardía, presentes en el grupo de estudio.

Bertrams<sup>41</sup> años atrás, había analizado lo dispuesto en el M. P.

37. Comm., 9 (1977), p. 104.

38. *Ibidem*, p. 105.

39. *Ibidem*, p. 105.

40. *Ibidem*, p. 105.

41. No podemos detenernos en analizar la doctrina de este autor que es, sin duda, uno de los que más han profundizado en la naturaleza de la potestad episcopal. Simplemente señalamos que, partiendo de unas consideraciones sociofilosóficas de la realidad sobrenatural y humana que es la Iglesia, llegaría a afirmar tanto el origen sacramental de la potestad como su carácter unitario; sin embargo, para que sea jurídicamente eficaz y ejercitable, requiere la determinación canónica que es condición esencial de su total constitución. Como resumen nos pueden servir las siguientes afirmaciones:

«Per consecrationem, episcopalem confertur potestas sacra unum totum constituens, quae, quoad munus docendi et regendi, ut sit efficax, exigit determinationem in communionem hierarchica» (W. BERTRAMS, *Communio, communitas et societas in Lege Fundamentale Ecclesiae*, en «Periodica», 61 —1972—, p. 384);

«Episcopis igitur in consecratione potestas Christi confertur. Etsi enim ab initio functiones, quas Episcopis exercendas habent, hodierna terminologia non designantur, tamen munera sanctificandi, docendi, regendi pastoraliter simul sumpta unam potestatem, scilicet Christi potestatem, constituunt, quia

*Causas matrimoniales*<sup>42</sup>. Ya entonces afirmó que el conocido c. 118 refleja tanto la constitución jerárquica de la Iglesia como el nexo existente entre la potestad, también de enseñar y regir, y la ordenación sacramental. Este nexo, afirmado por toda la tradición de la Iglesia, ha sido enseñado de nuevo *ex professo* por el Vaticano II. «Hisce suppositis, certum est can. 118 (quoad potestatem iurisdictionis) enuntiare principium theologicè fundatum, scilicet in natura potestatis iurisdictionis Ecclesiae. Principium huius generis non mutatur quasi per accidens, quasi per transennam, in aliquo documento, quo satisfit petitionibus prolatis ad faciliorem reddendum, in circumstantiis hodiernis, processum de nullitate matrimonii declaranda. Portius dicendum est: si principium tam fundamentale mutatur, hoc non fit nisi ex professo, modo claro et univoco, etiam, ne dubia damnosa iuris oriantur. Aliis verbis: Dispositiones huius documenti ('Causas matrimoniales') interpretandae sunt ita, 'ut salvum maneat principium can. 118 quoad iurisdictionem'»<sup>43</sup>.

Bertrams recuerda que toda potestad social se especifica por el fin que pretende conseguir. Los fines y los medios de la Iglesia —como su misma naturaleza— son sobrenaturales. De aquí que la potestad específica de la Iglesia es sobrenatural ya que trata de conseguir bienes espirituales. Es claro que lo sobrenatural excede las fuerzas naturales del hombre, de modo que para que alguien goce de la potestad específica de la Iglesia, esa potestad ha de conferírsele. Esta parece ser la razón por la cual —de acuerdo con la voluntad del Señor que así instituyó la Iglesia— la potestad sobrenatural ha de conferirse con la ordenación sacramental. «Ergo potestas Ecclesiae propria, utpote specifice sacra et supernaturalis —potestas quae ordinatur directe

haec potestas ad missionem Christi continuandam, in tota eius latitudine, confertur. Consequenter, sicuti potestas, quam Christus exercebat, quando in terris suam missionem implebat, una fuit, ita etiam potestas episcopales, in consecratione collata, una est, etsi ipsa plures functiones comprehendit». (IDEM, *De missione divina et de consecratione episcopali tamquam constitutiva officii Supremi Ecclesiae pastoris*, en «Periodica», 65 —1976—, pp. 188-189);

«Hac ratione tunc dici posset: 'Missione canonica habetur iurisdictione. Effertur autem esset, quod substantia huius 'iurisdictionis' episcopalis collata est sacramentaliter, scilicet per consecrationem episcopalem, quod missione canonica non constituitur ipsa potestas qua talis, sed illa habita potestas fit efficax iuridice» (IDEM, *De potestatis episcopalis exercitio personali et collegiali*, en «Periodica», 53 (1964), p. 465). En esta afirmación vemos con claridad que para Bertrams la *missio canonica* no es cauce de atribución de la potestad de jurisdicción, sino elemento conformador de la potestad sacramentalmente recibida que la hace jurídicamente eficaz.

42. IDEM, *Communio, communitas et societas...*, cit., pp. 588-596.

43. *Ibidem*, pp. 589-590.

et immediate ad finem supernaturalem— ordinatione sacramentali conferenda est»<sup>44</sup>.

Para determinar el posible ejercicio de potestad en la Iglesia por parte de un laico hay que acudir al siguiente principio fundamental: «Si agatur de potestate Ecclesiae propria —id est de potestate, quae natura sua extra Ecclesiam non habetur— cum ipsa sit ordinata ad iura et officia constituenda in Ecclesia societate specificè supernaturali, haec potestas reservatur ordinato sacramentaliter»<sup>45</sup>. De modo que un laico podrá ejercer sólo aquella potestad que *de se* no exceda el orden natural.

Y así, atendiendo a la naturaleza de la función del juez (hacer derecho entre las partes), la conclusión es la siguiente: «ne admittatur in dispositione M.P. *Causas matrimoniales*, quod laicus iudex constituitur; potius agitur de admittendo laico in tribunali collegiali, ut effectus sententiae collegialiter ferendae habeantur, quin ipse sit iudex, id est, quamvis tribunal non constituatur tribus iudicibus sacramentaliter ordinatis. Hisce expositis et suppositis concludimus: non haberi rationem ullam, ut, propter concessionem illam exceptionalem postulata propter penuriam Sacerdotum, qua laicus admitti potest in tribunali iudiciali, admitti possit mutatio principii fundamentalis, quod potestatem iurisdictionis reservat clericis. Etenim, saltem in tantum, in quantum iurisdictione se extendat ad iura ordinis supernaturalis constituenda et modificanda, haec potestas supponit ordinationem sacramentalem»<sup>46</sup>.

Con tal planteamiento no está de acuerdo aquel consultor que señaló la diferencia entre *munus* y *potestas* entre *fundamentum* y *radicem* de la potestad; y que, afirmando el fundamento sacramental de la estructura jerárquica de la Iglesia, mencionaba una vía no sacramental de atribución de facultades. Lombardía que en muchas ocasiones se ha manifestado en tal sentido<sup>47</sup> no encuentra «ninguna difi-

44. *Ibidem*, p. 593.

45. *Ibidem*, p. 594.

46. *Ibidem*, p. 595. Afirmaciones muy parecidas encontramos en O. ROBLEDA, *Decisionum quarundam Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Commentarius*, en «Periodica», 61 (1972), 82-87. En desacuerdo con ellas está, entre otros, P. A. BONNET, *Est in Ecclesia diversitas ministerii sed unitas missionis*, en AA.VV., *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*, Milano 1981, pp. 305-308.

47. No podemos analizar ahora el pensamiento de tan reconocido canonista. Una buena síntesis del fundamento y desarrollo de sus afirmaciones se encuentra en J. HERVADA y P. LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios I*, Pamplona 1970, pp. 313-405; y, en P. LOMBARDÍA, *Lecciones de Derecho Canónico*, cit., pp. 77-125.

Sí recogemos su interpretación de lo establecido por el Concilio: «El Va-

cultad para admitir que buena parte de los cargos de la organización oficial de la Iglesia pueden ser desempeñados por laicos, sin que por ello se desdibujen las raíces sacramentales de la organización ni se

ticano II, al mismo tiempo que precisa la naturaleza sacramental de la consagración episcopal, afirma que esta consagración, junto con la función (*munus*) de santificar, confiere también las funciones de enseñar y regir, las cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la Cabeza y los miembros del Colegio (*ibid.*, n. 21). De este texto pueden deducirse importantes consecuencias.

Ante todo, implica una rectificación de los planteamientos que establecían una rígida distinción entre potestad de orden y potestad de jurisdicción. La doctrina del Vaticano II se puede leer, en efecto, sin violencia desde la enseñanza de Mörsdorf sobre la complementariedad de las potestades de orden y de jurisdicción (Cattaneo) o a partir de la doctrina de Bertrams sobre la índole unitaria de los poderes (Bonnet).

No debe, sin embargo, pensarse que el Concilio Vaticano II atribuya también al rito sacramental la eficacia de una misión canónica, en la línea de la prohibición de las ordenaciones absolutas que hacía el c. 6 del concilio de Calcedonia; por el contrario, la nota explicativa previa al cap. III de la Const. *Lumen gentium* precisa que, si bien 'en la consagración se da una participación ontológica de las funciones (*munera*) sagradas se utiliza intencionadamente el término funciones y no la palabra potestades, porque esta última podía entenderse como potestad expedita para su ejercicio. Más para que de hecho se tenga tal potestad expedita es necesario que se añada la determinación canónica o jurídica por parte de la autoridad jerárquica' (n. 2). Esta determinación se reconduce en definitiva al tradicional concepto de la misión canónica...».

«...El problema más difícil estriba en precisar las diferencias entre esa participación ontológica en la función de regir y la potestad 'expedita para su ejercicio', que sólo se tiene cuando, además de la consagración, se ha recibido la misión canónica. Souto ha afirmado con acierto 'que los *munera* transmitidos por el sacramento son funciones personales, es decir, derechos de los sujetos que constituyen el contenido básico del estatuto jurídico de los obispos y de los presbíteros'. En cambio, la potestad en sentido jurídico 'supone una situación de superioridad de un sujeto respecto a otro, de tal modo que el inferior o sujeto pasivo aparece vinculado a las decisiones del que la detenta'. Esta potestad en sentido estricto es, para el citado autor, la 'única actividad creadora de derecho', 'que se manifieste en la triple vertiente: legislativa, judicial y administrativa'.

Hay que tener en cuenta, por tanto, que los problemas fundamentales del régimen jurídico del poder en la Iglesia no pueden ser entendidos sólo a partir de las nociones teológicas sobre los efectos de la ordenación. Es necesaria una construcción jurídica, que tenga en cuenta además la noción de comunión jerárquica, a la que el concilio Vaticano II condiciona el ejercicio de las funciones sacramentalmente recibidas (Const. *Lumen gentium*, nn. 21 y 28), y los efectos de la determinación jurídica que, según la nota explicativa previa, permite hablar de una potestad 'expedita para su ejercicio'». (P. LOMBARDÍA, *Leciones de Derecho...*, cit., pp. 96-97).

ponga en peligro el sentido eminentemente pastoral que debe tener el gobierno eclesiástico»<sup>48</sup>.

El reconocimiento conciliar de la aptitud de los laicos para ser llamados a desempeñar cargos eclesiásticos y la distinción esencial entre el sacerdocio común y ministerial le permite afirmar que los oficios atribuibles a los laicos son «todos aquellos para cuyo ejercicio no sean necesarias facultades derivadas del sacerdocio ministerial»<sup>49</sup>. Así «un laico no puede gobernar como Romano Pontífice la Iglesia universal o ser cabeza de una Iglesia particular, ya que lo impide la misma constitución divina. Tampoco sería idóneo para el desempeño de lo que en doctrina canónica se ha venido llamando oficios con cura de almas»<sup>50</sup>. Sí que podrán los laicos ser titulares de otros oficios —como es el de juez que ahora se discute— «puesto que la idoneidad para estos cargos no tiene por qué consistir en que estén ordenados obispos o presbíteros los sujetos que los desempeñen, sino en que tengan la necesaria pericia técnica y las cualidades oportunas»<sup>51</sup>. «Para llegar a esta conclusión, ni hay dificultades de orden teológico, ni faltan abundantes precedentes históricos»<sup>52</sup>.

Antes de volver a la información que *Communicationes* nos ofrece, podemos recordar que otro miembro del *coetus*, K. Mörsdorf, había visto de manera crítica la incorporación del laico a los tribunales eclesiásticos. Sus razones, sin embargo, no coinciden con las aducidas por Bertrams<sup>53</sup>. Así, tratando del juez laico ha escrito: «para justi-

48. IDEM, *Los derechos de los laicos*, en *Escritos de Derecho Canónico III*, Pamplona 1974, p. 274.

49. IDEM, *Los laicos*, en «Il Diritto Ecclesiastico», 83, 1972, p. 308.

50. *Ibidem*, pp. 308-309.

51. IDEM, *Escritos de Derecho Canónico III...*, cit., p. 274.

52. IDEM, *Los laicos*, cit., p. 309.

53. Aunque Mörsdorf ha hablado de un núcleo de potestad conferido en la consagración episcopal, la *missio canonica* es cauce de atribución de la potestad de jurisdicción y no mero elemento *determinante*. Dos afirmaciones suyas pueden ilustrar lo que queremos decir: «La consagración episcopal constituye —en los diversos grados jerárquicos que van de la suprema potestad del Romano Pontífice hasta el obispo diocesano— el fundamento ontológico tanto del oficio como de la potestad episcopal. Más precisamente se debe mantener que exista un núcleo esencial e interno (*innerer Wesenskern*) sin distinción de orden y jurisdicción» (K. MOERSDORF, voz: *Helige Gewalt*, en *Sacramentum Mundi*, Freiburg i. Br. 1968, vol. II, p. 593).

«La consagración sacerdotal hace al ordenado idóneo para poder representar a la Cabeza invisible de la Iglesia en el gobierno del Pueblo de Dios y en las funciones litúrgicas. Ella, sin embargo, no proporciona por sí misma ninguna potestad concreta de jurisdicción. Sólo la transmisión de esta última, que puede venir a través del conferirse un oficio eclesiástico o por delegación (cfr. c. 197, 1), hace surgir una relación de subordinación y de superioridad».

ficarlo se recurre al argumento de que en tiempos pasados ya existieron laicos como jueces eclesiásticos. Siguiendo este modo de argumentar se podría también afirmar que existieron obispos sin estar siquiera ordenados diáconos. Todo esto se debe a la separación entre Orden y Oficio que fue la base doctrinal, sobre la que se desarrolló en el alto Medioevo un dominio de los laicos que pudo ser superado sólo después de una controversia de siglos. El gran progreso eclesiológico del Vaticano II respecto a la constitución de la Iglesia es propiamente aquel de haber puesto fin a estas tendencias a la escisión. No es difícil imaginar cuál había sido la respuesta del Concilio en relación a la participación de laicos en tribunales si se piensa que, cuando estableció las facultades y funciones que competen al diácono, se cuidó mucho de asignarle cualquier función judicial y esto recordando la jurisdicción que antiguamente ejercitaron los archidiaconos»<sup>54</sup>.

Ante la diversidad de opiniones, quizá como posible solución, se sugirió lo siguiente:

«ut servetur § 1 can. 55, et expungantur aliae §§; postea vero habentur canones ubi particularia dicuntur. Alius hanc formulam canonis suggerit: 'Ad exercendam potestatem sacram constituti sunt episcopi, pro parte vero sua presbyteri et hisce inservientes diaconi. Christifideles vero laici, etsi ratione baptismatis suo modo participes facti sint muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis, vocari possunt ad assumenda certa officia ab his, qui ontologicè participes sunt potestatis sacrae'»<sup>55</sup>.

La reducción del canon a un único párrafo no sería aceptada. *Communicationes* no recoge más observaciones y presenta el texto que fue aprobado por los Consultores (*omnes*):

C. 55 § 1. Qui in muneribus Ecclesiae explendis partem ha-

riedad, que determina tanto la posición del pastor respecto a la grey confiada como las relaciones entre los mismos pastores y constituye el fundamento para el ejercicio ordenado de las potestades transmitidas con la consagración y con la misión canónica» (IDEM, voz: *Kirchengewalt*, en *Lexikon für Theologie und Kirche*, Freiburg i. Br. 1961, Vol. VI, p. 220).

Para un estudio más completo de la doctrina de este autor cfr. A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di K. Mörsdorf*, Pamplona 1986.

54. K. MOERSDORF, *Das Weihesakrament in seiner Tragweite für den verfassungsrechtlichen Aufbau der Kirche*, en «Ephemerides theologicae Lovanienses», 52 (1976), p. 201.

55 Comm., 9 (1977), p. 105.

bent, verum adimplent ministerium in servitium populi Dei, ad cuius quidem bonum spirituale promovendum potestatem qua ipsa ordinatione donantur sacram exercent Episcopi, pro parte sua presbyteri, necnon, ut eisdem inserviant, diaconi aliive qui ordinatione constituuntur ministri.

§ 2. Christifideles laici, quippe qui baptismo quo Christo incorporantur et confirmatione qua in fide roborantur, de munere Christi sacerdotali, prophetico et regali suo modo participes facti sint, in missione Ecclesiae explenda propriam sibi partem habent.

§ 3. Eadem ratione christifideles laici aptitudine gaudent ut ex commisione hierarchicae auctoritatis ad quaedam officia ecclesiastica, in fines scilicet spirituales, exercenda, ad normam iuris, deputentur<sup>56</sup>.

La fórmula, tan general, del canon no es extraño que gustara a todos. Resulta significativo que el antiguo §4 aparezca dividido en los actuales §§2 y 3. El último de ellos trata específicamente de la aptitud para recibir oficios eclesiásticos. Para algunos Consultores no se incluirían aquéllos que requieren para su ejercicio la potestad de régimen; para otros —la mayoría, como más adelante veremos—, también éstos quedaban incluidos.

### 3.1.2. *El laico y el «munus regendi»*

Respecto a la participación del laico, ya en concreto en el *munus regendi*, tienen especial interés tres cánones del proyecto de Ley Fundamental.

1.º) C. 69 (olim. can. 71):

§4. Potestate regiminis in Ecclesia gaudent qui gubernationis ministri in eadem sunt constituti, atque in eadem exercenda partem habent, ad normam iuris, ii quibus praedicti ministri exercitium huius potestatis commiserint<sup>57</sup>.

Las observaciones referentes a este último párrafo del canon, el de mayor interés para nosotros, no harían ninguna mención explícita de los laicos ni aportarían datos dignos de relevarse. Lo más significativo que entonces se dijo fue:

56. *Ibidem*, p. 106.

57. *Ibidem*, p. 279.

—«Alius censet clare affirmandum esse potestatem regiminis in Ecclesia haberi tantum vel divinitus collatam vel ab auctoritate commissam: forsitan igitur dici potest: 'ii quibus exercitium huius potestatis ad normam iuris committitur'. In eodem sensu, ultimus Consultor suggerit ut dicatur: 'ii qui exercitium huius potestatis ad normam iuris obtinuerint', quia ita describuntur omnes possibilitates»<sup>58</sup>.

Se propuso a votación un nuevo texto del §4; aprobado por 23 votos a favor y dos en contra, establecía lo siguiente:

C. 69 § 4. Potestate regiminis in Ecclesia gaudent qui gubernationis ministerio divinitus in eadem instructi sunt, atque in eadem exercenda partem habent ii qui eam ad normam iuris legitime obtinuerint<sup>59</sup>.

El canon distingue entre dos tipos de sujeto de la potestad de régimen. El alcance de la distinción, por lo publicado en *Communicationes*, no queda totalmente determinado. Y tampoco puede afirmarse que necesariamente se encuentren incluidos los laicos entre aquéllos que pueden tener parte en su ejercicio si «eam ad normam iuris legitime obtinuerint». El análisis de los cánones restantes ayudará a dar una respuesta a esta última cuestión.

2.º) C. 75 (olim. c. 77): § 1. In Ecclesia particulari sibi commissa, potestatem legislativam habet Episcopus dioecesanus, ad normam iuris exercendam; potestatem executivam quam vocant exercet per se ipsum atque etiam per alios ad normam iuris constituendos, qui vicariam qua instruuntur potestatem nomine episcopi exercent; iudicalem potestatem exercet per tribunalia ad normam iuris constituta, quae quidem nomine Episcopi causas sibi legitime commissas cognoscunt et de iis iudicant<sup>60</sup>.

Aunque fueron abundantes las observaciones al canon<sup>61</sup>, nos limitamos a presentar aquéllas que manifiestan pareceres opuestos.

a) «Primus Consultor ponit quoque quaestionem utrum potestas legislativa vel iudicialis committi possit necne christifidelibus laicis: Consultor dubitat, et praeoptat ut in canone

58. *Ibidem*, p. 280.

59. *Ibidem*, p. 281.

60. *Ibidem*, pp. 286-287. El segundo párrafo del canon no guardaba relación con el objeto de nuestro estudio.

61. Cfr. *ibidem*, pp. 286-288.

dicatur: 'Episcopus dioecesanus potestatem legislativam (et iudicalem) exercet per seipsum atque etiam per alios sacerdotes'».

b) «Memorat Relator M.P. Causas matrimoniales, quo quaestio solvitur relate ad potestatem iudicalem; si vero fundamentum theologicum quaeratur, tunc quaestio proponenda erit S.C. pro Doctrina Fidei».

c) «Alius recolit quaestionem de mulieribus, necnon factum quod laici munera gubernii non habent in dicasteriis Curiae Romanae. Memorat tamen alius Consultor facta historica magni momenti, cuiusmodi est potestas iurisdictionis exercita per saecula a quibusdam Abbatissis, etc.»<sup>62</sup>.

d) «Aliquis censet haud facile inveniri posse solutionem naturae doctrinalis ad affirmandum vel negandum laicos capaces esse exercendi iurisdictionem. Attamen Supremus Legislator, per actum vel per actos iuridicos singulis in casibus ponendos, solvere potest quaestionem».

e) «Ultimus Consultor recolit verba Const. Lumen gen-

62. En un reciente artículo se han analizado brevemente los casos de algunas abadesas alemanas (cfr. M. DE FUERSTENBERG, *Exempla iurisdictionis mulierum in Germania septentrionali-orientali*, en «Periodica», 73 (1984), pp. 89-111). La conclusión es la ya conocida: durante siglos, con la aceptación de los Romanos Pontífices, ejercieron verdadera jurisdicción eclesiástica.

El 15 de octubre de 1976, la S.C. para la Doctrina de la Fe, en la Declaración *Inter insigniores* (AAS, 69 (1977), pp. 98-116) analizó la cuestión de la ordenación de mujeres. El 28 de enero de 1977 aparecía publicada en *L'Osservatore Romano* junto con un comentario, cuya lectura se recomendaba, que la misma Sagrada Congregación había hecho preparar a un experto teólogo (no se decía el nombre). En este comentario se leía: «Il Medio Evo ci ha lasciato esempi della partecipazione delle donne alla giurisdizione ecclesiastica: alcune abadesse (e non le abadesse in generale, come a volte si legge in articoli divulgativi) hanno compiuto atti normalmente riservati ai vescovi, come la nomina di parroci o di confessori. Queste usanze sono state più o meno, riprovate dalla Santa Sede in diverse epoche... Non bisogna però dimenticare che alcuni signori si arrogavano simili diritti: anche i canonisti ammettevano che la giurisdizione può esser separata dall'Ordine. Il Concilio Vaticano II ha cercato di precisare meglio il rapporto tra l'una e l'altro, in una visuale dottrinale che senza dubbio farà sentire i suoi effetti sulla disciplina». (*L'Osservatore Romano*, 28-I-1977, p. 4).

Las últimas palabras parecen expresar que, como fruto de una incorrecta comprensión de la relación entre la potestad de régimen y el Orden sagrado, se había estado aceptando algo que en realidad constituía un exceso de atribuciones. Como veremos en el apartado 3.1.3, la misma Sagrada Congregación (en diciembre de 1976), aceptaría que no todo ejercicio de la potestad de régimen requiere como condición esencial la recepción del sacramento del Orden.

tium, n. 33: '(Laici) aptitudine gaudent, ut ad quedam munera ecclesiastica, ad finem spiritualem exercenda, ab Hierarchia adsumentur'. Alia similia verba Concilii Vaticani II ab aliis Consultoribus etiam recoluntur»<sup>63</sup>.

Podemos resumir las observaciones diciendo que si bien existe un acuerdo entre los Consultores en excluir al laico de la participación en el ejercicio de la potestad legislativa, respecto al ejercicio de la potestad judicial se mantienen las diversas posturas ya conocidas. Para dirimir las controversias se sugiere acudir a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.

El texto propuesto por el primer Consultor, que excluiría a los laicos de participar en la potestad judicial, se sometió a votación y el resultado fue el siguiente: «Placet ut non addantur verba a primo consultore proposita, utque quaestio ponatur S.C. pro Doctrina Fidei»<sup>64</sup>.

Estando así las cosas, el Relator propuso un nuevo texto, que sería aceptado por los Consultores («hic textus placet Consultoribus»). El canon quedaba redactado en estos términos:

C. 75 § 1. In Ecclesia particulari sibi commissa, potestatem legislativam habet et personaliter exercet solus Episcopus dioecesanus, eamque nulla persona nullumque collegium participat et Episcopus non nisi in casibus iure universaliter expresse statutis alii committere valet; executivam potestatem exercet per seipsum atque etiam per alios ad normam iuris constituendos, qui vicariam qua instruuntur potestatem nomine Episcopi exercent; iudicalem potestatem communiter exercet per tribunalia ad normam iuris constituta, quae quidem nomine Episcopi causas sibi legitime commissas cognoscunt et dirimunt<sup>65</sup>.

El canon, teniendo presentes las discusiones habidas, acepta el ejercicio por parte del laico —siempre como miembro de un tribunal— de la potestad judicial. Se había pedido el fundamento teológico de esta posibilidad y habría que esperar a la respuesta de la Sagrada Congregación para la confirmación de lo establecido por el canon.

Ya sólo nos queda presentar el canon que, por tratar específicamente la cooperación del laico en el *munus regendi* del Obispo, resume los dos anteriores:

63. Comm., 9 (1977), p. 288.

64. *Ibidem*, p. 288.

65. *Ibidem*, pp. 288-289.

- 3.º) C. 78 (olim. can. 80): Christifideles laici quoque rationem baptismatis sui vocantur ut Episcopis in populo regendo praestent operam, variaque implere valent officia quae, debita competentia et praestantia si gaudeant, christifidelibus laicis ad normam iuris committi possunt<sup>66</sup>.

La única observación hecha fue la siguiente:

«Cardinalis Praeses, attentis quoque iis quae dicta sunt quoad can. 75, memorat totum problema residere in determinando quae sint 'munera ecclesiastica ad finem supernaturalem exercenda', quae laicis committi possunt iuxta Const. Lumen gentium, 33. Textus provisorie placet, donec responsum habeatur a S.C. pro Doctrina fidei»<sup>67</sup>.

Evidentemente se estaban incluyendo en el canon oficios que suponen el ejercicio de la potestad de régimen; en otro caso no existiría problema alguno.

### 3.1.3. *La consulta a la S.C. para la Doctrina de la Fe*

La revisión del c. 75 tuvo lugar entre los días 23 y 27 de febrero de 1976. Volvió a verse entonces, como en 1971 por el *coetus* «*De Sacra Hierarchia*», la necesidad de determinar con precisión los oficios que podrían atribuirse a los laicos.

Aunque en *Communicationes* no se ha publicado el texto de la consulta, sabemos que se realizó el 12 de marzo de 1976 en los siguientes términos:

«Utrum laici, utpote baptismate suo modo munerum Christi participes facti, adsumi possint, sub ductu quidem Episcoporum, ad aliqua munera regiminis seu iurisdictionis, participationem nempe secumferentia in potestatibus legislativa, executiva vel iudiciali: et si affirmative, quaenam sint haec munera ecclesiastica ad finem spiritualem exercenda qua etiam laicis committi possunt?»<sup>68</sup>.

El autor que recoge la pregunta nos dice que ésta se hizo especialmente para convalidar la formulación del que figuraría en el esquema de 1977 como c. 96<sup>69</sup> y que establecía lo siguiente:

66. *Ibidem*, p. 293.

67. *Ibidem*, p. 293.

68. Recogida por U. BETTI, *In margine al nuovo Codice di Diritto Canonico*, en «*Antonianum*», 58 (1983), p. 641 (nota 36).

69. Cfr. *ibidem*, p. 641. Acerca de la primera elaboración de este canon,

C. 96. Potestatis regiminis in Ecclesia, ad norman praescriptorum iuris, habiles sunt, qui ordine sacro sunt insigniti; in exercitio eiusdem potestatis, quatenus quidem eodem ordine sacro non innitur, ii qui ordine sacro non sunt insigniti eam tantum partem habere possunt quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.

Tampoco *Communicationes* ofrece el texto de la respuesta. Acerca de ella Provost afirma lo siguiente: «la Congregación respondió que dado el actual estado de las investigaciones doctrinales sobre esta cuestión, no quería dar una respuesta exacta y precisa. Sin embargo, sí dio ciertos criterios prácticos respecto a la revisión del Código de modo que no se cerraran de antemano legítimas discusiones»<sup>70</sup>. Y nos dirá que «aunque no le consta que la respuesta se haya publicado es, sin embargo, conocido que fueron tres los criterios presentados a la Comisión de reforma: 1) mientras que dogmáticamente los laicos sólo son excluidos de los oficios intrínsecamente jerárquicos, para los cuales se requiere la recepción del Orden, la determinación de aquellos oficios de los que aquí se trata corresponde a los organismos establecidos *ad hoc* por la Santa Sede; 2) ha de tenerse enorme cuidado para evitar crear un ministerio pastoral laico en contraposición con el ministerio de los clérigos; 3) todo lo que se permita a los laicos debe estar dentro del contexto del derecho existente, sin innovaciones en el Código»<sup>71</sup>.

De lo dicho por este autor parece deducirse que la respuesta no fue tan resolutiva como se esperaba; y, sin embargo, sería suficiente para que, en el seno de la Comisión —que tenía a la vista el texto exacto—, se afirmara lo siguiente:

a) «Secondo una risposta della S. Congregazione per la Dottrina della Fede ad un quesito posto dalla nostra Commissione, anche i laici possono partecipare della potestà di giu-

fundamental para nuestro estudio, *Communicationes* —hasta el momento— no ha publicado nada.

70. J. PROVOST, *The participation of the laity in the Governance of the Church*, en «*Studia Canonica*», 17 (1983), p. 419.

71. *Ibidem*, p. 419 (nota 7). En el artículo de U. BETTI, *In margine...*, cit., p. 641 se recoge como textual de la respuesta lo siguiente: «Dogmaticamente... i laici sono esclusi soltanto dagli uffici intrinsecamente gerarchici, la cui capacità è legata alla recezione del sacramento dell'Ordine». Y en la nota 36 de esa misma página se lee que la respuesta fue decidida por los Cardenales el 15 de diciembre de 1976 y aprobada por el Romano Pontífice el día 17.

risdizione quando 'singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit'»<sup>72</sup>.

b) «Per essere sicuri dal punto di vista dottrinale, anche riguardo alla dottrina del Vaticano II in merito, il testo del predetto can. 96 'De normis generalibus' fu sottoposto al parere della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, ed è stato da essa approvato»<sup>73</sup>.

Por lo publicado en *Communicationes* ningún Consultor puso en duda que con la respuesta quedaba aprobado el canon. Sin embargo, no cesaron las discusiones acerca de su contenido. Se estaba afirmando la capacidad del laico para ejercer la potestad de régimen (la delimitación exacta de este ejercicio no se establecía, quedando en manos de la autoridad suprema), y a esto se oponían aquéllos que: o bien mantenían la absoluta inseparabilidad del orden y la jurisdicción, o bien consideraban que la *totalidad* de la potestad sagrada se transmite únicamente por el sacramento del Orden.

### 3.2. *El último estudio de los cánones*

Hacemos un salto en el tiempo —este reconocimiento se realizó en las sesiones celebradas en septiembre de 1979 y enero de 1980—, para decir que con la respuesta de la S.C. para la Doctrina de la Fe, los cc. 75 y 78, provisionalmente aceptados, se hicieron definitivos. En esta última fase de revisión no se realizaron modificaciones importantes ni han aparecido publicadas discusiones de interés.

Los cánones quedaron redactados de la siguiente manera:

C. 57 § 2. (antes c. 55). Ceteri christifideles, de munere Christi sacerdotali, prophético et regali suo modo participes in iisdem muneribus explendis propriam sibi partem habent atque aptitudine gaudent ut ex commissione hierarchicae auctoritatis ad quaedam officia ecclesiastica exercenda deputentur<sup>74</sup>.

C. 72 § 4. (antes c. 69). Potestate regiminis in Ecclesia gaudent qui gubernationis ministerio divinitus in eadem in-

72. Comm., 11 (1979), p. 59. La intervención fue de R. Castillo Lara, y tuvo lugar el 1 de marzo de 1979.

73. Comm., 14 (1982), p. 72. La afirmación es en este caso de W. Onclin, y se produjo el 14 de enero de 1980.

74. Cfr. Comm., 13 (1981), p. 65.

structi sunt, atque in eadem exercenda partem habent ii qui eam legitime obtinuerint<sup>75</sup>.

C. 78 § 1. (antes c. 75). In Ecclesia particulari sibi commissa, potestatem legislativam habet et personaliter exercet solus Episcopus dioecesanus, eamque nulla persona nullumve collegium participat et Episcopus non nisi in casibus a suprema Ecclesiae auctoritate expresse statutis alii committere valet; executivam potestatem exercet per seipsum atque per alios ad normam iuris constitutos, qui vicariam qua instruuntur potestatem nomine Episcopi exercent; iudiciale potestatem communiter exercet per tribunalia ad normam iuris constituta, quae quidem nomine Episcopi causas sibi legitime commissas cognoscunt et dirimunt<sup>76</sup>.

C. 81 (antes c. 78). Christifideles laici quoque ratione baptismatis sui vocantur ut Episcopis in populo regendo praestent operam, variaque implere valent officia quae, debita competentia et praestantia si gaudeant, christifidelibus laicis ad normam iuris committi possunt<sup>77</sup>.

Teniendo presente la respuesta de la Sagrada Congregación no parece haber dificultad para afirmar que, en algunos casos a determinar exclusivamente por la suprema autoridad, podrían incluirse en los cc. 57 § 2 y 81 oficios que supongan ejercicio de la potestad de régimen. De igual manera, y siempre en esos casos, el laico podría contarse entre «ii qui eam legitime obtinuerint» del c. 72 § 4.

Como es sabido, ninguno de estos cánones se incorporaría al Código<sup>78</sup>.

#### 4. REVISIÓN DE LOS ESQUEMAS 1977 Y ANTERIORES

El esquema de 1977, como los anteriores esquemas parciales, se envió al Romano Pontífice, y, con su autorización, fue sometido al

75. *Ibidem*, p. 72.

76. *Ibidem*, p. 76.

77. *Ibidem*, p. 78. Por su parecido con el c. 57 § 2 se pidió que fuera suprimido. La propuesta se rechazó porque «in ipso agitur specificiter de laicorum participatione in munere regendi» (*Ibidem*, p. 78).

78. El contenido de los cc. 57 § 2 y 81 viene a reflejarse en el actual c. 228 y el del c. 78 § 1 en el actual c. 391. El c. 72 § 4 puede relacionarse, exigiendo muchas matizaciones, con el actual c. 129.

examen de todo el Episcopado y demás órganos de consulta (Dicasterios de la Curia Romana, Universidades y Facultades eclesiásticas y la Unión de superiores Generales). Como se lee en el prefacio del Código, todas las enmiendas fueron consideradas con la máxima atención, atendiendo principalmente a su congruencia con las doctrinas y normas prácticas del Concilio Vaticano II y el Magisterio Pontificio <sup>79</sup>.

En este apartado presentamos la información ofrecida por *Communicationes* acerca de la revisión de tres cánones: el c. 190 (esquema «*De Sacramentis*» enviado a consulta en 1975); el c. 20 (esquema «*De modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus*», enviado a consulta en 1976), y el c. 128 del esquema de 1977.

#### 4.1. *Sacerdocio común y ministerial*

El c. 190, que sustituía al c. 948 del antiguo Código <sup>80</sup>, establecía lo siguiente:

C. 190. Sacramento ordinis ex Christi institutione inter christifideles quidam, caractere perenni quo signantur, constituuntur sacri ministri seu clerici, qui nempe eodem consecrantur et deputantur ut in persona Christi munera adimplentes Evangelium annuntiandi, christifideles regendi et divinum cultum celebrandi, Dei Populum pascant <sup>81</sup>.

En la sesión celebrada entre los días 6 y 10 de febrero de 1978 se estudiaron las observaciones realizadas por los órganos consultores <sup>82</sup>. Para nuestro estudio tienen especial interés las que sugerían:

79. Cfr. Codex Iuris Canonici. Praefatio. AAS 75, Pars. II (1983), p. XXVII.

80. C. 948. Ordo ex Christi institutione clericos a laicis in Ecclesia distinguit ad fidelium regimen et cultus divini ministerium.

81. Comm., 10 (1978), p. 180. Con una redacción más conforme con el Concilio, permanece lo sustancial del canon del Código del 17. Respecto al gobierno de la Iglesia no puede olvidarse que ésta es una sociedad desigual. Pablo VI en la sesión inaugural de los trabajos de revisión del Código había dicho: «Notum est, sed iuvat id in memoriam revocare, a iure divino manere quaedam elementa constitutiva Ecclesiae, quae est societas inaequalis, nempe primatum Romani Pontificis, episcopatum, ac deinde presbyteratum, diaconatum. Etiam laici sunt ex hoc parte recensendi, qui tamen regendi carent facultate» (AAS, 57 (1965), p. 985).

82. Cfr. Comm., 10 (1978), pp. 179 ss. Un *coetus specialis* «*De sacramentis*» realizó esta revisión. El *Relator* era W. Onclin, al igual que en las revisiones ya vistas de la LEF y de los primeros trabajos del *coetus* «*De Sacra Hierarchia*».

- a) que se insistiera en el aspecto eclesiológico del Orden sagrado y en la diferencia entre el sacerdocio común y el ministerial; y,
- b) que apareciera con mayor claridad la distinción entre Obispos, presbíteros y diáconos, «qui ultimi potestatem regendi non participant»<sup>83</sup>.

Estas sugerencias fueron incorporadas de la siguiente manera:

«Desideratur ut distinctio inter sacerdotium commune et ministeriale appareat, et ad hoc proponitur ut dicatur 'in persona Christi Capitis'; (loco 'ex Christi institutione', dicatur 'ex divina institutione', quia presbyteratum et diaconatum Christus directe non instituit). Ut diversitas conditionis et distinctio inter episcopatum, presbyteratum et diaconatum melius indicentur, adiungantur post 'consecrantur et deputantur ut verba 'pro suo quisque gradu'»<sup>84</sup>.

El canon quedaba redactado en los siguientes términos:

C. 190 Sacramento Ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, caractere indelebili quo signantur sacri ministri, qui nempe eodem consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera adimplentes Evangelium annuntiandi, christifideles regendi et divinum cultum celebrandi, Dei Populum pascant<sup>85</sup>.

Teniendo presentes tanto este canon como las discusiones analizadas hasta el momento en nuestro trabajo, podemos decir que todo bautizado sin estar sacramentalmente destinado a ello, goza, sin embargo, de aptitud (no de derecho) para ser llamado por la Jerarquía a desempeñar ciertas tareas eclesiológicas «públicas»: aquellas que no requieran para su ejercicio la recepción del Orden. Respecto a estas tareas la diferencia entre laicos y clérigos parece no ser tanto de capacidad cuanto de destinación. Sólo estos últimos están sacramentalmente destinados a ellas y las desarrollarán, *pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis*.

En concreto, respecto a cargos con posible ejercicio de la potestad

83. Comm., 10 (1978), p. 180.

84. *Ibidem*, p. 181. Los cambios introducidos no acaban de dar respuesta exacta a las observaciones presentadas; es patente la dificultad de plasmar jurídicamente cuestiones teológicamente no totalmente perfiladas.

85. *Ibidem*, p. 181. En el esquema 1982 aparecía modificada, sin afectar al fondo, la redacción de las últimas líneas, y sin cambios aparece en el actual c. 1008. (Dice así: «in persona Christi Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant»).

de régimen, el mismo Pablo VI —que tan de cerca siguió los trabajos de revisión—, había dictado el M.P. *Causas matrimoniales* y aprobado la respuesta de la S.C. para la Doctrina de la Fe. Sin romper la estructura jerárquica de la Iglesia y manteniendo la distinción esencial entre el sacerdocio común y el ministerial, los laicos podrían cooperar con los Sagrados Pastores en el ejercicio de la potestad de régimen.

#### 4.2. *El juez laico en el tribunal colegial*

C. 20 (CIC. 1574). § 1. In dioecesi constituentur ab Episcopo iudices dioecesani qui sint clerici. Necessitate suadente potest Conferentia Episcopalis permittere ut collegium iudicans constet ex uno viro laico et ceteris clericis.

§ 2. Iudices sint integrae fama et in iure canonico periti<sup>86</sup>.

En la revisión del canon, realizada el 7 de abril de 1978 por el *coetus «De processibus»*<sup>87</sup>, se realizaron las siguientes observaciones:

Un Consultor dudaba de la oportunidad de admitir diáconos al oficio de juez; «alii vero (paucissimi tamen) dubitaverunt non solum de opportunitate sed et de possibilitate conferendi etiam laicis iurisdictionem ac proinde de possibilitate promovendi laicos ad officium iudicis»<sup>88</sup>.

Entre estos pocos que dudaban de la posibilidad de conferir a los laicos jurisdicción se encuentra G. Damizia. En su opinión, el Vaticano II no estimó oportuno conservar la clásica distinción de potestad de orden y de jurisdicción, y se esforzó por reconducir a la unidad (*sacra potestas*) la potestad de la Iglesia<sup>89</sup>. «Proprio in tale prospettiva il Concilio ha voluto ricondurre ogni potestà della Chiesa all'única fonte dell'Ordo, enunciando il principio che la *Episcopalis consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi*. Non si parla di potestà, ma di *munera* per meglio mettere in risalto la loro funzione pastorale. Anche in forza della consacrazione

86. Comm., 10 (1978), pp. 230-231.

87. Tuvieron parte en él: «Exc-mus Castillo Lara, Secretarius commissionis, Exc-mus Aurelius Sabattani, *Relator*, et Consultores, Pinto, Damizia, Dordett, Maida, O'Connell, Ciprotti. Huic Coetui aggregatus est etiam P. Ignatius Gordon, quamvis non adnumeretur inter Consultores nostrae Commissionis» (Comm., 10 (1978), p. 209).

88. *Ibidem*, p. 231.

89. Cfr. G. DAMIZIA, *Rapporto tra «munus docendi» et «munus sanctificandi»*, en «Monitor Ecclesiasticus», 104 (1984), pp. 100-103.

episcopale si diventa membri del *Corpus Episcopale*. Tale dottrina si applica anche ai presbiteri, i quali, con la sacra ordinazione, ricevono i *munera docendi sanctificandi et regendi*, perché anche essi partecipano al ministero di Cristo ed al suo sacerdozio»<sup>90</sup>.

Para Damizia, afirmada la unidad de la potestad de la Iglesia y reconociéndose el Orden como su fuente, no cabe la posibilidad de que un laico pueda ejercer jurisdicción.

Sin embargo, como leemos en *Communicationes*, la mayoría de los miembros del *coetus* veía las cosas de otra manera:

«Consultores vero tenent laicos partem habere posse in exercitio potestatis iudicialis, quia haec potestas non innitur in ordine sacro et suam sententiam probant argumentis sive ex historia sive ex doctrina probatorum theologorum desumptis. Quoad opportunitatem autem, non est locum dubitandi, quia quae habentur in canone iam vigent in Ecclesia, ope M.P. 'Causas matrimoniales' a Summo Pontifice promulgato. Quibus de causis duo Consultores volunt mutare canonem ita ut dicatur Episcopus posse etiam viros laicos non tantum ad actum sed permanenter iudices constituere, ex quibus unus assumatur ad efformandum collegium, firma tamen lege quod iudex unicus debet semper esse clericus. Post brevem disceptationem etiam alii Consultores huic propositioni accedunt»<sup>91</sup>.

La razón por la que se estima que los laicos pueden tener parte en el ejercicio de la potestad judicial es *quia haec potestas non innitur in ordine sacro*. El sentido de esta afirmación no resulta sencillo de precisar con exactitud. En el *coetus* «*De laicis*» (vid. apartado 2.3) se había dicho que para desempeñar el oficio de juez no se requiere el sacerdocio ministerial. Lo aquí afirmado podemos quizá entenderlo de esa manera; es decir, como una forma de expresar que no todo el ejercicio de la potestad de régimen exige necesariamente la recepción del Orden sagrado.

Se hicieron otras observaciones, ya de menor interés, y fue aprobada por los Consultores una nueva redacción. El principal cambio consistiría en que los laicos, aunque siempre actuaran en tribunal colegial, podían ser constituidos como jueces permanentes. El canon establecía lo siguiente:

C. 20 (CIC. 1574). § 1. In dioecesi constituentur ab Episcopo iudices dioecesani qui sint clerici.

90. *Ibidem*, p. 103.

91. *Comm.*, 10 (1978), p. 233.

§ 2. Episcoporum Conferentia permittere potest ut etiam viri laici iudices constituentur, ex quibus, suadente necessitate, unus assumi possit ad collegium efformadum.

§ 3. Iudices sint integrae fama et in iure canonico doctores vel saltem licentiat<sup>92</sup>.

#### 4.3. *Oficios reservados a los clérigos*

C. 128. Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici ordine sacro innixa.

Recogemos las discusiones habidas en el seno del *coetus «De Populo Dei»* en la reunión del 14 de enero de 1980, cuando se analizaban las observaciones hechas al esquema de 1977<sup>93</sup>.

a) «Mons. Segretario richiama all'attenzione dei Consul-tori il can. 96 'De normis generalibus', il cui testo è: 'Potestatis regiminis in Ecclesia, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt, qui ordine sacro sunt insigniti; in exercitio eiusdem potestatis, quatenus quidem eodem ordine sacro non innititur, ii qui ordine sacro non sunt insigniti eam tantum habere possunt quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit'».

b) «Il secondo Consultore considera il testo valido. L'ufficio infatti è un presupposto necessario per l'esercizio della potestà di regime 'ordine sacro innixa'».

c) «Il sesto Consultore ripropone la sentenza di una Conferenza Episcopale circa il testo del canone: 'Canon continet affirmationem indolis dogmaticae et requiritur ut, iuxta Concilium Vaticanum II, sermo sit de potestate sacra et ut ulterior distinctio hic supprimatur. Eo vel magis hoc requiritur

92. *Ibidem*, p. 231.

93. Cfr. Comm., 14 (1982), pp. 71-73. Muy interesante resulta la composición de este grupo de estudio: «Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Pontificia Commissione e S.E. Mons. Rosalio Castillo Lara, Segretario. E Relatore il Rev.mo. Mons. Guglielmo Onclin, Segretario aggiunto. Gli attuari sono i Rev. di D. Giuliano Herranz e Mons. Nicola Pavoni, Officiali della medesima Commissione. Sono inoltre presenti: S.E. Mons. G.M. van Zuylen, Vescovo di Liegi, e Rev. mi K. Mörsdorf, A. del Portillo, V. Bavdaz, E. Eid, W. Aymans ed il Prof. P. Gismondi». (Comm., 14 (1982), p. 67).

quod verba potestas regiminis ecclesiastici ordine sacro innixa innuere videntur dari etiam talem potestatem quae non est ordine sacro innixa, quod non est cum doctrina conciliari conveniens' (il Relatore e altri non sono d'accordo con questa affermazione assoluta). Ideo proponitur textus huius canonis: 'Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas sacra'».

d) «Il Relatore fa notare che, per essere sicuri dal punto di vista dottrinale, anche riguardo alla dottrina del Vaticano II in merito, il testo del predetto can. 96 *'De normis generalibus'* (di cui si tiene conto nel presente can. 128) fu sottoposto al parere della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, ed è stato da essa approvato».

e) «Anche il settimo Consultore ha dubbi circa la connessione assoluta e automatica tra potestà di regime e potestà di ordine, come suggerisce questa Conferenza Episcopale».

f) «Il secondo Consultore afferma che la formula proposta dalla Conferenza Episcopale in questione certamente è retta, perché riporta quanto dice il Concilio Vaticano II, pensa però che sia insufficiente perché si parla solamente di 'potestà sacra'. Sappiamo quanta difficoltà ci fu per definire questa questione durante il Concilio. In realtà la questione rimane aperta. La *potestas sacra* è certamente unica, ma si esercita tramite diverse funzioni ed alcune di esse possono essere affidate per delegazione, ecc., anche ai fedeli che non abbiano ricevuto l'Ordine sacro»<sup>94</sup>.

Volvemos a encontrarnos con distintas maneras de entender, quizá como fruto de una diversa interpretación de lo establecido por el Concilio, la relación entre las potestades de orden y de jurisdicción.

La redacción propuesta por la Conferencia Episcopal (mencionada por el 'sexto Consultor'), coincide exactamente con la que había presentado en octubre de 1966 uno de los Consultores<sup>95</sup>.

94. *Ibidem*, pp. 71-72.

95. *Vid.* apartado 2.2. En aquella ocasión K. Mörsdorf estaba presente en el *coetus*. Ahora, junto al maestro de Munich, figura también W. Aymans, discípulo suyo.

Interesantes son las siguientes afirmaciones de este último: «La canonística medieval aveva distinto la potestà spirituale in una *potestas ordinis* e una *potestas iurisdictionis*. Il senso di questa distinzione era quello di risolvere un impellente problema costituzionale di tutto il primo millennio della chiesa e cioè la questione di che cosa avviene con un esponente di autorità spirituale

Los motivos para modificar el canon se reducen a dos: de acuerdo con el Concilio ha de utilizarse la expresión *sacra potestas*, sin hacer más distinciones; y, además, porque no es conforme con las enseñanzas conciliares afirmar la existencia de una potestad de régimen *ordine sacro non innixa*.

No sabemos hasta qué punto los que afirmaban la capacidad del laico para recibir, de manos de la autoridad suprema, cierta participación en el ejercicio de la potestad de régimen estaban realmente afirmando la existencia de una doble potestad de jurisdicción. El c. 128, que ahora se revisa, puede entenderse como una forma de expresar que hay oficios, sin duda los capitales y también otros por su carácter más pastoral, para los que se requiere estar ordenado (*vid.* apartado 2.2.1.). Sólo con lo publicado en *Communicationes* resulta difícil precisar más los términos de la discusión.

W. Aymans se ha pronunciado, en diversas ocasiones, en contra de la posible existencia de una doble potestad de régimen. Así, comentando el caso del juez laico<sup>96</sup> nos dice: «Dado que un laico no puede

che è venuto meno nel suo ufficio e che perciò si è stati costretti a deporre. La risposta data nei concetti citati voleva distinguere nell'unica autorità spirituale quegli elementi che vengono trasmessi senza possibilità di revoca con la sacra ordinazione da quegli elementi che vegono conferiti con un atto giurisdizionale e che perciò sono avocabili. L'effettivo sviluppo storico non si è però potuto sempre sottrarre al fraintendimento e alla connessa tentazione di interpretare la distinzione di per sé formale in un senso rigorosamente oggettivo e di separare tra di loro i due elementi dell'unica potestà spirituale. In questo modo sorsero nella chiesa due potestà, una potestà di ordinazione rivolta all'ambito sacramentale e, da questa separata, una potestà di giurisdizione in funzione del governo. Sviluppata nelle sue conseguenze questa divisione non solo significa lo snaturamento dell'autorità spirituale ma viene anche causata una divisione della chiesa nella sua essenza. La chiesa appare così da un lato come una comunità di azioni sacre con organi a ciò abilitati, dall'altro, indipendentemente da questa, come una grandezza sociale che ha bisogno di ordine e di organi competenti» (W. AYMANS, *Autorità apostolica nel popolo di Dio. Sul fondamento e i limiti del mandato spirituale*, en «Communio», 36 (1977), p. 43). Pocas líneas después añadía: «Contro una tale deformazione della chiesa si è opposto il Vaticano II... È ora irrilevante se con la grande maggioranza degli interpreti del concilio si è dell'idea che il concilio insegni la trasmissione di ogni autorità spirituale esclusivamente attraverso la consacrazione oppure se si ritiene ancora possibile la tradizionale differenziazione (ma non separazione) di potestà di consacrazione e di potestà pastorale nel senso dell'unità della *potestas* della chiesa, in ogni caso dopo il concilio Vaticano II è da escludere ogni concezione di una *potestas* di giurisdizione indipendente dalla consacrazione» (*Ibidem*, pp. 44-45).

96. Se ocupó este autor de analizar las disposiciones del M.P. *Causas matrimoniales* en su artículo *Laien als kirchliche Richter?* en «Archiv für ka-

ser sujeto de *potestas sacra*, parece como si el legislador defendiera que el juez, que dictamina en un tribunal colegial, ejerciera una potestad distinta e independiente del Orden. No existe, sin embargo, un fundamento teológico para la hipótesis de dos tipos de potestad, o incluso de dos potestades en la Iglesia»<sup>97</sup>. Con otras palabras: «¿Cómo puede, por ejemplo, explicarse que la autoridad de un juez no se basa en el Orden Sagrado mientras que la del legislador sí?»<sup>98</sup>.

Si algunos Consultores se habían mostrado en desacuerdo con una conexión absoluta y automática entre la potestad de orden y de jurisdicción, las restantes observaciones al canon nos decían lo siguiente:

a) «Il settimo Consultore pensa che il termine *officia*, usato nel nostro can. 128, è troppo arcaico; preferirebbe che si dicesse *munera* per togliere il carattere troppo restrittivo della parola *officia*.

b) Mons. Segretario nota, per quanto riguarda la parola *officia*, che la nozione ripresa dal Concilio è riportata nelle Norme Generali: 'munus in finem spiritualem stabiliter collatum'.

c) «Il primo e il terzo Consultore dichiarano che il canone piace loro sia perché è generico, sia anche perché concorda con quanto espresso nel can. 96 delle Norme Generali, già approvato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Concorda anche il quinto Consultore».

d) «Mons. Segretario, anche se non è contrario alla formula proposta da questa Conferenza Episcopale, che appare retta, preferisce la formula dello schema per due ragioni:

— nel Codice si parla della potestà di regime e quando si tratta 'de officiis' non si può non sottolineare la stessa potestà come elemento essenziale per l'esercizio dell'ufficio. Se si parlasse di 'potestà sacra', bisognerebbe poi specificare;

— d'altra parte, la formula dello schema non pregiudica la discussione circa la connessione tra potestà di regime e potestà di ordine»<sup>99</sup>.

tholisches Kirchenrecht», 144 (1975), pp. 4-20. Tras la promulgación del Código volvería, siempre de manera crítica, a analizar el caso del juez laico para afirmar que lo dispuesto resulta eclesiológicamente inaceptable. (Cfr. W. AYMANS, *Die Träger kirchlicher Dienste*, en AA.VV., *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, p. 194, nota 24).

97. W. AYMANS, *La Iglesia en el Codex: aspectos eclesiológicos del nuevo Código en la Iglesia Latina*, en «Burgense», 26 (1985), pp. 222-223.

98. IDEM, *Ecclesiological Implications of the New Legislation*, en «Studia Canonica», 17 (1983), p. 87.

99. Comm., 14 (1982), pp. 72-73.

El canon fue sometido a votación con el siguiente resultado: «7 Consultori preferiscono il testo com'è. Il sesto e il settimo Consultore votano contro, per motivi diversi»<sup>100</sup>.

Si es lógico suponer que Aymans se mostraba partidario de la modificación del canon<sup>101</sup>, no cabe duda de que P. Gismondi se contaba entre los que constituían el sentir mayoritario. En efecto, años antes había escrito: «La *Lumen gentium*, dopo avere ricordato la nota duplicità dell'ordinamento gerarchico della Chiesa (distinzione fra *clerici* e *laici*) proclama che 'tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune' ed è riconosciuta ai laici 'la capacità per essere assunti dalla gerarchia ed esercitare per fine spirituale alcuni uffici ecclesiastici'. I laici —dopo il Concilio— non sono più solo i fedeli e tanto meno perpetui 'minorenni' ma è evidente che, mentre si può considerare abrogato il can. 118 per cui *soli clerici possunt obtinere potestatem sive ordinis sive iurisdictionis*, non c'è dubbio che sia tutt'ora in vigore il can. 107, per cui *ex divina institutione sunt in Ecclesia clerici a laicis distincti*»<sup>102</sup>.

## 5. REVISIÓN DEL ESQUEMA 1980

Concluida la revisión de los cánones de los esquemas de 1977 y anteriores, la Secretaría de la Comisión y los Consultores se enfrentaron con la tarea de coordinar todos ellos. Así aparecería el primer proyecto general del Código, compuesto por siete libros, y denominado *Schema 80*.

100. *Ibidem*, p. 73.

101. Claras son estas palabras suyas: «benché il concilio fondi univocamente la *sacra potestas* nella consacrazione per cui i portatori dell'autorità spirituale debbano essere cercati esclusivamente nei membri consacrati del popolo, tuttavia non si può passare sotto silenzio il fatto che il concilio insegna anche la partecipazione di tutti i membri del popolo di Dio e quindi anche la partecipazione dei laici ai tre *munera*. È vero che il concilio limita questa affermazione sostenendo che la partecipazione alla missione è data *pro parte sua* e ai *munera suo modo*. La differenza qui espressa può riferirsi solamente alla *sacra potestas*» (W. AYMANS, *Autorità apostolica nel popolo di Dio...*, cit., p. 43).

102. P. GISMONDI, *Il Diritto della Chiesa dopo il Concilio*, Milano 1973, p. 45. En la p. 87 de esta misma obra dirá: «Spetterà al futuro legislatore precisare quali siano gli uffici cui i laici possano essere assunti. Ovviamente non potranno mai essere loro attribuiti uffici riservati alla gerarchia da norme di diritto divino positivo».

El esquema fue presentado al Sumo Pontífice el 29 de junio de 1980. El Papa dispuso que se ampliara la Comisión, de modo que se manifestara mejor la participación de la Iglesia entera en la fase final de los trabajos, y que a todos se enviara dicho *Schema* para que se pudieran emitir nuevas *animadversiones*.

A principios de 1981 se enviaron muchas enmiendas que luego con la ayuda de consultores especialmente expertos en las distintas materias fueron sometidas por la Secretaría de la Comisión a cuidadoso examen, y colegial discusión. Una síntesis de todas estas enmiendas, juntamente con las respuestas dadas por la Secretaría y los Consultores, fue remitida a los miembros de la Comisión en el mes de agosto de 1981<sup>103</sup>. Tal síntesis constituye la denominada *Relatio 1981*.

### 5.1. *La Relatio de 1981*

Antes de pasar a analizar lo contenido en ella acerca de los cánones que nos interesan, nos parece conveniente recoger éstos con la numeración y redacción que presentaban en el nuevo esquema.

C. 126. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt, qui ordine sacro sunt insigniti; in exercitio eiusdem potestatis, quatenus eodem ordine sacro non innititur, christifideles laici eam partem habere possunt quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.

C. 244. Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici ordine sacro innixa.

C. 1373 § 1. In dioecesi constituentur ab Episcopo iudices dioecesani qui sint clerici.

§ 2. Episcoporum Conferentia permittere potest ut etiam viri laici iudices constituentur, ex quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum.

§ 3. Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati.

103. Cfr. Codex Iuris Canonici. Praefatio. AAS, 75 Pars II (1983), p. XXIX.

### 5.1.1. *El laico, el clérigo y la potestad del régimen*

Las observaciones hechas al c. 126, precepto clave para determinar los sujetos de la potestad de régimen, fueron abundantes y de distinto signo. Las únicas observaciones al c. 244 que figuran en la *Relatio* están incluidas en esta discusión del c. 126.

1. La primera crítica al canon iba acompañada de una nueva propuesta de redacción. Con ella se intentaba evitar que el laico fuera considerado incapaz de ejercer jurisdicción.

«Non placet statutio quod laici non sunt 'habiles potestatis regiminis'. Infelici modo distinctio inter clericos et laicos statuitur. Si laici sunt inhabiles, quomodo possunt illam potestatem exercere? Consideretur, ex. gr. oeconomus: iuridicam habet stabilitatem ('ne amoveatur nisi ob graven causam'), implicat exercitium executivae potestatis ('bona dioecesis sub auctoritate Episcopi administrare') et exerceri potest a laico. Proponitur sequens formulatio: 'Potestas regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia, ad normam praescriptorum iuris proprie exercetur ab illis qui ordine sacro sunt insigniti; quatenus eodem ordine sacro non innitur, potestas regiminis exercetur a christifidelibus laicis ex concessione singulis pro causis ab auctoritate Ecclesiae suprema' (unus Pater)»<sup>104</sup>.

A pesar de lo dicho en esta observación no parece que el canon está afirmando una inhabilidad absoluta de los laicos para ejercer la potestad de jurisdicción. Si el c. 96, al que éste sustituye, se sometió al examen de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe fue precisamente porque aceptaba tal capacidad en el laico. La primera parte del canon, que ciertamente establece diferencias de capacidad entre los clérigos y los laicos, no afirma una habilidad exclusiva de los ordenados respecto a la totalidad de la potestad de régimen; si así fuera, el canon 126 sería contradictorio en sí mismo.

2. Sólo la segunda observación obtendría respuesta inmediata; la supresión de la frase «et etiam potestas iurisdictionis vocatur» en ella solicitada no sería aceptada.

3. La tercera observación, realizada como se sabe por los cardenales J. Ratzinger, G. E. Hume, T. O'Fiaich y J. Freeman<sup>105</sup>, pediría

104. Comm., 14 (1982), p. 146.

105. Cfr. U. BETTI, *In margine al nuovo Codice...*, cit., p. 638 (nota 28).

la supresión de toda posible afirmación de capacidad en el laico para tener parte en el ejercicio de la potestad de régimen. Como veremos volverán a presentarse argumentos ya aducidos en la revisión del esquema de 1977, y a ello se añadirán razones históricas y de conveniencia para la Iglesia:

«Fundamentalis proponitur obiectio contra hunc canonem 126 simulque contra canones 244 et 1373, § 2. Proponitur textus ita emendatus: 'Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti'. Emendatio ad canonem 244 proponitur: 'Soli clerici obtinere possunt officia, ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis (quae quidem semper est ordine sacro innixa)'. Canon 1373 deleri debet (quattuor Patres). Rationes indicantur quae sequuntur:

a) Non apparet in his canonibus notio suprema 'potestatis ecclesiasticae' (duo Patres).

b) Ex verbis 'potestas regiminis ordine sacro innixa' inferri potest in Ecclesia unicam dari potestatem, quae quidem fundatur ordine sacro. Haec conceptio congruit cum doctrina quae habetur in Concilio Vaticano II (Lumen gentium 21, 2; 28, 1); Nota explicativa ad LG Pr., n. 2, § 2. Canon autem 126 alium conceptum profert; vi huius canonis, exercitium huius potestatis regiminis potest etiam concedi iis qui non habent potestatem sacram, et quidem vi simplicis concessionis ab Ecclesiae suprema auctoritate; et hoc apparet etiam ex eo quod iudices nominari possunt laici in processibus in quibus collegium trium iudicum de causa matrimoniali iudicare debet. Verbis 'in exercitio ... ipsis concedit' canonis 126 in iure periculosa introduceretur notio. Ita fieri potest ut potestas decisionis in Ecclesia concedi posset corporibus quibus tantummodo pertinet suam dare opinionem, non autem decisionem ferre, scilicet ut etiam potestas decisionis, legislativa vel administrativa, laicis in Episcoporum Conferentiis, in Conciliis particularibus, omnibus scilicet qui in ipsis participant, etiam laicis agnoscatur. Hoc duceret ad erroneam divisionem potestatis publicae in Ecclesia et esset contrarium constitutioni Ecclesiae (duo Patres)» <sup>106</sup>.

106. Comm., 14 (1982), pp. 146-147.

Podemos entender mejor esta última razón recordando algunas afirmaciones del actual Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Años atrás J. Ratzinger había escrito acerca de los peligros de «democratización» de la Iglesia que podrían originarse por una errónea interpretación de la expresión Pueblo de Dios que es la Iglesia<sup>107</sup>. Ya entonces señaló: «la idea de un Sínodo mixto como una autoridad suprema permanente de las Iglesias nacionales, considerada a la luz de la tradición de la Iglesia y de su estructura sacramental y de su fin específico, es una idea quimérica. (...) Se basa de hecho en una separación inadmisibles, en última instancia, del poder de orden y de jurisdicción, rechazando lo uno al campo de la magia y lo otro al campo de lo profano: el sacramento se concibe como algo ritual y no como misión para dirigir la Iglesia mediante la liturgia y la palabra; por el contrario, el gobierno es considerado como un mero asunto político administrativo ya que se tiene a la Iglesia misma sólo como un instrumento político»<sup>108</sup>.

El cardenal Ratzinger descubre pues con toda claridad la raíz del problema: orden y jurisdicción no pueden separarse en la Iglesia sin grave perjuicio del correcto entendimiento de su mismo ser y obrar y en esta línea sigue el texto de la observación:

«c) Etiam doctrina sic introducta contraria est historicae evolutioni doctrinae potestatum. In Ecclesia potestas ad munera sacra adimplenda non oritur a populo, sed nititur missione a Christo data, a potestate quam Christus tradidit apostolis 'ut suae participes potestatis, omnes populos facerent discipulos suos' (Lg 19,1). In systemate prioris temporis Ecclesiae, scilicet relativae ordinationis, unitas aderat ordinationis et muneris: concessio muneris fiebat per ordinem sacrum. Certo aderant problemata: quid v.gr. quando Episcopus in haeresim lapsus a munere privatus erat? Ex iis quaestionibus exorta est idea distinctionis inter potestatem ordinis et potestatem iurisdictionis et ita conceptio admissa est, vi cuius potestas ordinis ordinatione concedebatur, dum potestas iurisdictionis revocari poterat ab auctoritate. Attamen unitas potestatis sacrae ex eo patebat quod potestas iurisdictionis semper et tantum uti conexa cum potestate ordinis existere potuit. Mox autem ita proposita est doctrina ut duae potestates distinctae

107. Cfr. J. RATZINGER-H. MAIER, *¿Democracia en la Iglesia?*, Bilbao 1971 (traducción de Venancio Mancebo del original *Demokratie in der Kirche*, Limburg 1970).

108. *Ibidem*, pp. 38-39.

proponerentur. Ita pervenerunt ad doctrinam independentiae potestatis iurisdictionis a potestate ordinis. In Codice a. 1917 servata est unitas potestatis sacrae, quae semper ab Hierarchia dependet, ita ut soli clerici eam potestatem habere possint, sed admissum etiam est eandem potestatem 'ratione ordinis' et 'ratione iurisdictionis' distingui posse (can. 118) (unus Pater).

d) In Concilio Vaticano II unitas omnis potestatis in Ecclesia magis affirmatur et denuo sermo est de 'potestate sacra.' Potestas presbyteri est participatio potestatis episcopalis, sed in eadem exercenda pendet ab Episcopo (LG 28,1). Sed, potestas Episcopi, ordinis et iurisdictionis, nititur ordinatione (LG 21, 2, Nota explicativa, Pr. n. 2, 2). De diaconis non datur affirmatio directa de participatione eorum in 'potestate sacra'. Ipsis conceditur vel agnoscitur ius assistendi matrimoniis (LG 29, 1) et ideo concludi debet quod diaconus 'habilis' est ad partem determinatam et limitatam habendam in 'potestate sacra'. Idea autem participationis laicorum in 'potestate sacra', est aliena a Concilio. Eorum pars in munere regendi tantummodo indicat quod esse possunt in servitio directionis seu regiminis, sed suo modo, ergo non ut exercentes ipsam potestatem, quia non habent ordinem sacrum. Idea potestatis sacrae ordine non innixa non existit in documentis Concilii. M. P. Causas matrimoniales, quatenus agnoscit partem laicorum in exercitio potestatis iudicialis, ergo possessionem illius potestatis, dicendum est non congruere cum doctrina conciliari (idem Pater)»<sup>109</sup>.

No podemos dejar de recoger otras afirmaciones del cardenal J. Ratzinger, que ilustrarán la íntima relación existente entre el orden y la jurisdicción, entre el Sacramento y el Derecho. Así, analizando el Vaticano II, ha escrito: «el límite estrecho que, desde hace siglos, se ha interpuesto en la concepción de una gran parte de los teólogos occidentales entre el poder sacramental y el poder jurídico, comienza a hacerse poroso, y aparece ya ante nuestros ojos el íntimo cruzamiento de las dos realidades, que, en último término, constituyen una sola»<sup>110</sup>.

Y en otras palabras, «tanto el concepto de sacramento como el de jurisdicción, se mueven en una luz nueva, o mejor: ambos aparecen de nuevo en la primitiva luz de la teología de los Padres, que había

109. Comm., 14 (1982), pp. 147-148.

110. J. RATZINGER, *La colegialidad episcopal*, en AA. VV., *La Iglesia del Vaticano II*, Barcelona 1966, p. 755.

quedado temporalmente oscurecida por otro desarrollo más reciente (\*). La teología de la primera escolástica había rechazado precisamente la sacramentalidad del oficio episcopal, preferentemente fundándose en que el sacramento de la Consagración estaba ordenado al *corpus verum* (verdadero Cuerpo) del Señor, por tanto, al servicio eucarístico, y desde este punto de vista, la Consagración episcopal no otorga ninguna facultad nueva, ya que la Consagración sacerdotal confiere el pleno poder de la Transustanciación. El poder recibido en la Consagración episcopal se refiere al *corpus mysticum*, a la Iglesia; pero el poder sobre el *corpus mysticum* es descrito por los teólogos medievales como *iurisdictio* y colocado, por tanto fuera del *Ordo* que hace relación a la Eucaristía. En la teología actual se ha puesto de nuevo en claro que el *corpus verum* y el *corpus mysticum* están recíprocamente subordinados, que nos es dado el *corpus verum* del Señor para que, partiendo de El, se edifique el *corpus mysticum*, y solamente en la edificación del *corpus mysticum* se consuma el sentido de la donación del *corpus verum*. De este modo, no es posible separar también el servicio de uno del servicio del otro; ambos son, más bien, el servicio en un cuerpo del Señor»<sup>111</sup>. En el Concilio, por tanto, se manifestó «la convicción de que la jurisdicción no es una mera adición externa al oficio episcopal, sino que está entrañada en el estructura del sacramento mismo»<sup>112</sup>.

La observación de los cardenales Ratzinger, Hume, O'Fiaich y Freeman finalizaba con la siguiente razón:

«e) Non intellegitur laicos partem habere posse in exercitio alicuius potestatis, quam non possident; habetur contra-

111. *Ibidem*, p. 757. El contenido de la nota, señalada con asterisco en el texto, es significativo: «Esto lo ha puesto de relieve el arzobispo Parente en un importante artículo de «L'Avvenire d'Italia», de 21-I-65: 'Fue un excesivo influjo del derecho en la teología lo que llevó de la mano a concebir la potestad de jurisdicción como separada de la potestad de Orden, sosteniendo que la primera le viene al obispo por una extrínseca concesión del Papa, mientras la otra deriva de la misma consagración. El Concilio vuelve a la concepción primitiva...».

112. *Ibidem*, p. 770. Lo establecido en la Nota previa explicaría más esta misma idea ya que: «acentúa que la Consagración presta una participación esencial en los poderes santos, que necesita, sin embargo, de determinación jurídica para poder comportar el acto mismo, como se infiere ya sencillamente de la necesidad de la colaboración entre muchos portadores de la jurisdicción. Esta determinación es asignada según las normas aprobadas 'por la autoridad suprema': esta clase de afirmaciones, así dice la *Nota*, se referirían al plano de la determinación jurídica del poder episcopal en la Iglesia y no excluirían, por tanto, una participación fundamental y ontológica en el oficio de Pastor, que fue comunicada ya por el sacramento mismo».

dictio in terminis in affirmatione, vi cuius persona potest exercere potestatem, quam rationibus theologicis nequit possidere; ad personam quae non est 'habilis' non potest transmitti potestas aliquo actu iuridico, ne quidem actu iuridico auctoritatis supremæ. Etiam exercitium alicuius potestatis, vel participatio in exercitio alicuius potestatis, quam non possidet, est inventio aliqua, nullo fundamento innixa. Ideo dici etiam debet quod potestas regiminis 'ordine sacro non innixa' est contradictio in seipso. Talis conceptio est contraria doctrinae Vaticani II et est periculosa. Itaque proponitur textus ab initio ad hunc canonem expositus et a dictis Cardinalibus postulatus. Ab iisdem petitur etiam ut canon 1373 supprimatur (quattuor Patres)»<sup>113</sup>.

Otros, sin embargo, no veían obstáculos a la posible participación del laico en el ejercicio de la potestad de régimen. En el apartado 5.1.3. nos detendremos a analizar esta postura; ahora nos limitamos a presentar ya sin comentar, el resto de las observaciones:

«4. Contraria sententia proponi tamen videtur ab alio (unus Pater). Proponit ut non tantum suprema Ecclesiae auctoritas possit concedere potestatem regiminis ministris non ordinatis, sed etiam ut talis potestas laicis tribui possit ab Episcopis dioecesanis et Episcoporum Conferentiis. Ratio allegata est: ad vitandam nimiam centralisationem.

5. Petitur etiam ad hunc canonem ut dividatur in duplicem §§: prima esset 'Potestatis regiminis, quae ex divina institutione est in Ecclesia, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti'; altera § esset: 'In exercitio...' usque in finem, uti prostat (aliquis Pater).

6. Valde expedit ut affirmetur etiam principium generale, ad mentem nn. 21 et 27 Constitutionis dogmaticae De Ecclesia, nempe quod unica est in Ecclesia Christi potestas sacra, licet in eadem habetur pluralitas seu diversitas functionum. Ideo funditus revisendus est etiam can. 132 necnon omnes canones qui potestatem regiminis respiciunt. Opportunum est ut de singulis functionibus potestatis regiminis normae certae et clarae in novo Codice tradantur (idem Pater)<sup>114</sup>.

113. Comm., 14 (1982), p. 148.

114. Comm., 14 (1982), p. 149. El c. 132 recogía la distinción de funciones de la potestad de régimen. Las normas ciertas y claras que aquí se piden quedarían reducidas a muy poco.

7. Non intellegitur quid significetur per verba 'singulis pro causis'. Prout sonant verba, videretur necessarius actus supremae Ecclesiae auctoritatis pro unoquoque casu concreto, quo personae laicae concrederetur; hoc non videtur intendi. Ergo clarius dicatur oportet (alter Pater).

8. Canon 126 statuit quod in exercitio potestatis regiminis, quatenus ordine sacro non innititur, christifideles laici eam partem habere possunt quam singulis pro causis auctoritas suprema Ecclesiae ipsis concedit. Haec autem possibilitas 'tum viros tum mulieres' respicit. Attendant super hanc quaestionem specialem Patres quibus iudicium pertinet (semper idem Pater)»<sup>115</sup>.

La importancia de las razones aducidas por los distintos Padres hizo que la respuesta de la Comisión fuera: «Quaestiones hic motae committantur dirimendae Plenariae Congregationi Commissionis»<sup>116</sup>.

#### 5.1.2. *El juez laico*

La supresión del c. 1373 § 2, solicitada, como ya vimos, en la *animadversio* n. 3 al c. 126, volvería a proponerse:

«Supprimatur, quia admissio laicorum in exercitium 'potestatis sacrae' violationem principii theologici fundamentalis (scil. quod potestas sacra originem habet sacramentalem) significat. Nulla cogens ratio ex admissione iam facta in M. P. *Causas matrimoniales* desumi potest neque rationes a Pontificia Commissione adductae serium habent fundamentum. Concilium Vat. II cum doctrina classica a Schmalzgrueber proposita plene concordat: '...at vero iudicare in causa spiritali, seu ecclesiastica est actus iurisdictionis spiritalis cuius laicus non capax est, etiam adiuncto ei coniudice ecclesiastico' (*Ius ecclesiasticum universum*, tom. I, pars altera, Romae 1844, p. 175) (Duo Patres)»<sup>117</sup>.

La respuesta que figura en la *Relatio* fue verdaderamente contundente. Se afirmaba la unanimidad de los consultores en mantener el

115. *Ibidem*, p. 149.

116. *Ibidem*, p. 149.

117. Comm., 16 (1984), p. 54. Adviértase la insistencia en utilizar la expresión *sacra potestas*. Si en la observación n. 3 se había dicho que toda potestad encuentra en el Orden su fundamento, ahora —mencionándose sólo *sacra potestas*— se afirma su origen sacramental.

canon, y lo que es más importante, no se aceptaba como un principio demostrado que el Concilio hubiese afirmado el origen sacramental de toda potestad de régimen:

«Coetus consultorum unanimiter censet quod praescriptum M. P. Causas matrimoniales in canone receptum quoad admissionem laicorum in collegio iudicum manere debet. Animadversio supponit principium quod nullo modo demonstratum est, scil. quod Concilium Vaticanum II omnino docuit originem sacramentalem totius potestatis regiminis ac proinde exclusio absoluta laicorum a participatione in munere regendi»<sup>118</sup>.

A continuación la respuesta añadiría:

«Citatio praeterea Schmalzgrueber non reproducit *fideliter* mentem cl. mi Auctoris.

In ipso loco, in responsione ad quaestionem 'Utrum laici delegari possint ad causas ecclesiasticas et spirituales ut matrimoniales, beneficiales, etc.' scribit: '...dicendum laicos ad causas spirituales et ecclesiasticas, etiam cum Clericis de iure delegari non posse. Ita communis cum Hostiensi... Addidi *de iure non posse*; nam *Pontifex*, qui est supra omne ius ecclesiasticum, ex certa scientia et Papalis potestatis plenitudine laico committere etiam causarum universitatem potest, non tantum temporalium, quae inter Clericos intercedunt, sed etiam *spiritualium qualiumcumque*, ut cum communi notat Hostiensis...' (sequitur postea textus in animadversionibus citatus).

Ut clare patet in textu, incapacitas haec laicorum provenit tantum *ex iure ecclesiastico*. Hoc clarius exprimitur in textu sequenti:

'Dub. 6. An laicus iure delegato possit de causis spiritualibus cognoscere?

Respond. distinguendo: *potest ex delegatione Summi Pontificis non vero ex delegatione alterius Praelati ecclesiastici...*'.

Pars 1ª patet ex plenitudine potestatis, quam universalissimam Papa habet, ut per se vel per alios cognoscat de omni causa spirituali, modo illi, per quos cognoscit, non sint iure divino inhabiles. Atqui *laicus non est iure divino inhabilis* ad cognoscenda spiritualia, *si id agat, non proprio sed alieno nomine*. Igitur per illos, tamquam delegatos suos potest ea Papa cognoscere et iudicare.

118. *Ibidem*, p. 54.

Pars 2<sup>a</sup> constat ex eo quod Episcopus vel alius Papa inferior nequit id, quod *iure superiori* constitutum est abrogare...’ (Schmalzgrueber, L. II, tit. 1, n. 56)»<sup>119</sup>.

En la *Relatio* también figura otra observación al c. 1373 § 2: «Placet admissio laicorum (alicui Patri), sed non placet exclusio mulieris ab hoc munere. Agitur de iniusta discriminatione, rationibus obiectivis non innixa (quinque Patres)»<sup>120</sup>. La respuesta quedaba en manos de la Plenaria.

### 5.1.3. *El voto de A. Stickler*

En defensa de la validez de los cánones 126, 244 y 1373 § 2 dos consultores, A. Stickler y J. Beyer, redactaron unos dictámenes que serían posteriormente publicados<sup>121</sup>. Sustancialmente los dictámenes coincidían; aquí nos limitaremos a presentar, sintéticamente, el contenido del primero de ellos.

En el voto de Stickler se analizan dos cuestiones:

1.<sup>a</sup> «Utrum vera sit affirmatio quae contendit canones supra citatos doctrinam novam de potestatibus ecclesiasticis introducere, traditionem historicam autem unam tantum potestatem cognovisse ordine sacro mediante conferendam. Quae quaestio revera ipsam naturam potestatis sacrae in Ecclesia implicat.

2.<sup>a</sup> Utrum vera sit affirmatio quae dicit Concilium Vaticanum II veram naturam potestatis sacrae restituisset tamquam potestatem unam ab ordine sacro originem trahentem; talem nempe naturam praecedente tempore evolutione erronea contaminatam esse»<sup>122</sup>.

Después de aportar algunos datos históricos<sup>123</sup> responde a la primera en los siguientes términos: «Nullum ergo dubium esse potest quin, etiam in primo Ecclesiae millennio, quamvis nulla adhuc doctrina recognita de potestatis sacrae natura et distinctionibus theoretice enucleata esset, de facto tamen duplex hierarchia et duplex po-

119. Comm., 16 (1984), p. 55.

120. *Ibidem*, p. 54.

121. A. STICKLER, *De potestatis sacrae natura et origine*, en «Periodica», 71 (1982), pp. 65-91 y J. BEYER, *De natura potestatis regiminis seu iurisdictionis recte in Codice renovata enuntianda* en «Periodica», 71 (1982), pp. 93-145.

122. A. STICKLER, *De potestatis sacrae...*, cit., p. 66.

123. Cfr. *ibidem*, pp. 66-71. Stickler en el artículo *La bipartición de la potestad eclesiástica en su perspectiva histórica*, en «Ius Canonicum», XV (1975), pp. 45-75, ofrecía —también resumidamente— aquellos datos en los que fundamenta su postura. (Al comienzo de ese artículo figura una referencia bibliográfica de las obras del autor que guardan relación con la cuestión).

testas exstiterit, altera ordinis, altera regiminis; illa cum ordine, haec cum officio conferenda, illa personae, haec officio inhaerens. Nullo ergo modo affirmare licet in istis saeculis totam et unam sacram potestatem exstitisse et ex ordine sacro originem traxisse, quia tali assertioni tota traditio certa contradicit»<sup>124</sup>.

La formulación doctrinal de tal distinción sólo se alcanzaría en el siglo XI<sup>125</sup> y, ya algo más perfeccionada, sería desde el s. XII universalmente aceptada y propuesta por teólogos y canonistas<sup>126</sup>. «Ex his omnibus factis et doctrinis clare patet in Ecclesiae Christi conscientia semper exstitisse duplicem speciem potestatis sacrae, unam sine altera haberi potuisse, utramque ergo potestatem separabilem esse, unam non ex altera originem ducere, quamvis utramque simul praesulem ornare deberet. Numquam ergo in Ecclesia sententia invaluit potestatem regiminis ex ordine sacro originem trahere»<sup>127</sup>.

La respuesta adecuada a la segunda cuestión es, para Stickler la siguiente: «Ante omnia affirmandum est Concilium Vaticanum II neque voluisse neque potuisse negare et infirmare dispositionem divinam et traditionem constantem et scienter assertam, omnino conformem naturae potestatis sacrae, eiusque distinctionis, quae voluntate divina nititur. Sed in concreto dicendum est quod Concilium Vaticanum II numquam dixit quod ei attribuitur. In 'Nota explicativa praevia' enim, quae textui connectitur tamquam pars integralis, Concilium —praeveniens interpretationes erroneas posteriores praevidendas vel praevisas— expresse statuit quod verba 'munera' quae ordine sacro conferentur non significant 'potestates'; quod, collatio potestatis ad

124. *Ibidem*, p. 71.

125. Así lo explica Stickler: «Doctrina recognita seu theoria de potestate sacra enucleata est tantummodo, ut iam supra innuimus, cum necessitas practica urgeret. Quod tandem aliquando evenit, cum validitas exercitii et efficacia potestatis in dubium vocaretur propter defectum dignitatis personalis vel propter haeresim et schisma sacrorum praesulum. Quae quaestio generaliter tempore luctae investiturarum laicalium a saec. XI in posterum institit. Quidam negabant validitatem omnium actuum huiusmodi episcoporum, quidam licitatem tantum. Discussio huius gravissimae et practicae quaestionis pedentim hos fructus maturavit: distinctionem recognitam invexit inter duas sacrae potestatis species, ordinis et iurisdictionis, inter utriusque naturam, fines exercitium et etiam originem. Potestas ordinis ordine sacro personae traditur, semper remanet, semper valide exercetur etsi non semper licite. Potestas iurisdictionis seu regiminis cum officio cui inhaeret confertur et cum officio retringi et auferri potest; ideoque valide exercetur tantum quando quis officio legitime fungitur iuxta normas statutas» (*Ibidem*, p. 72).

126. Recoge el autor algunas afirmaciones de M. J. Scheeben y F. W. Wernz (cfr. *ibidem*, pp. 80-81) y no falta la célebre cita de la *Summa Theologiae* II-II, q. 39, a. 3.

127. *Ibidem*, p. 80.

actum expedita, iuridica determinatione indiget, quae fieri potest in concessione particularis officii, vel in assignatione subditorum, iuxta mentem missionis canonicae episcoporum, quae praecise collationem officii in mentem revocat (n. 24)»<sup>128</sup>.

Y, ya en relación con la posible participación de los laicos en el ejercicio de la potestad de régimen, afirmará: «dicitur quod non datur exercitium potestatis regiminis ex parte eius qui non habet possessionem propriam potestatis seu officii i.e. qui non est eius 'titularis'. Hoc esset —dicunt— contradictio illogica in can. 126 schematis introducta vel nova schematis inventio sine fundamento. Responsio non videtur difficilis; nemo enim ignorare potest vetustissimum institutum iuris, potestatis nempe delegatae, quae praecise significat exercitium potestatis ex parte personae, quae eam non habet in propria possessione vel ratione officii, sed quae recipit eius exercitium ab alio, qui potestatem habet propriam, ad personam, ut tractet res determinadas»<sup>129</sup>. No faltan hechos históricos que muestran la concesión de esta potestad de jurisdicción a fieles laicos, y Stickler se detiene en señalarlos<sup>130</sup>.

El autor también presenta las ya conocidas citas de Schmalzgrueber y todo parece indicar que la Secretaría de la Comisión y gran parte de los Consultores se mostraron esencialmente conformes con su opinión.

#### 5.1.4. *Observaciones a la sistemática*

El trabajo de revisión entraba en sus últimas fases y la *Relatio* de 1981 muestra cómo algunos consideraban incorrecto que la potestad de régimen se tratara en el Libro I «De las normas generales».

Aquí sólo presentamos una de las *animadversiones*, la más significativa, que pedía la inserción de lo referente a la potestad de régimen allí donde se tratara de la Sagrada Jerarquía, decía así:

«Titulus 'De potestate regiminis' (cann. 126-141) item in Libro II est inserendus. Asseritur quidem in Praenotandis, eum translatum esse ad Librum I, ob generalem eiusdem applicationem in universo Ecclesiae iure (p. 7). Sed affirmatur potestatem regiminis, quatenus ordine sacro innitur, solis clericis reservari, et initio can. 273, § 1, eadem thesis affirmatur. Obvius sensus canonis 126 est quod per se 'potestas regiminis'

128. *Ibidem*, p. 83.

129. *Ibidem*, p. 87.

130. Cfr. *ibidem*, p. 88.

ligatur potestati ordinis, et hoc confirmatur Constitutione Lumen gentium, n. 21. Itaque, cum praeditus titulus 'De potestate regiminis' non agat de personis, sed de potestate personarum, transferri debet ad Librum II, ad initium partis, in qua de Sacra Hierarchia quaestio est (semper idem Pater)»<sup>131</sup>.

La propuesta, no sería aceptada:

«Unus tantum rogat ut fiat haec translatio. Alii ergo sunt concordantes ut remaneat ordo uti in schemate est. Insuper schema non est habendum ut tractatus scholasticus, et in eo agitur de generali schematica iuris. Ergo remaneat ordo dicendorum uti est in schemate»<sup>132</sup>.

## 5.2. La Sesión Plenaria

Celebrada a finales de octubre de 1981, había sido convocada por mandato del Sumo Pontífice, para que se deliberara sobre el texto completo del nuevo Código y se votara definitivamente. En ella el debate se entabló principalmente sobre seis cuestiones que, elaboradas en forma de dudas por la misma Secretaría de la Comisión, se consideraban de mayor importancia. La primera decía:

«Utrum cann. 126, 244 et 1373 § 2, quatenus admittunt quod Suprema Ecclesiae Auctoritas laicis concedere possit quandam participationem in exercitio potestatis regiminis ordini sacro non innixae retineri debeant, aut potius immutandi sint eo sensu quod nulla concedatur participatio propter doctrinam quae a quibusdam tradita dicitur a Concilio Vaticano II circa originem sacramentalem omnis potestatis ecclesiasticae regiminis et inscindibilem unitatem 'potestatis sacrae' in Ecclesia»<sup>133</sup>.

Como preparación de la Plenaria, en relación con esta cuestión «se envió a todos los participantes un dossier que incluía lo siguiente: 1) Observaciones de varios cardenales; el más notable, Ratzinger;

131. Comm., 14 (1982), p. 128. El mencionado c. 273 § 1 establecía lo siguiente: «Habiles sunt laici qui idonei reperiantur, ut ad illa officia ecclesiastica et munera a sacris pastoribus assumantur, quibus secundum iuris praescripta fungi valent», que efectivamente muestra que son los Sagrados Pastores quienes gobiernan la Iglesia. Sin embargo, resulta incorrecto mantener que todo ejercicio de la potestad de régimen se reserva sólo a los clérigos.

132. *Ibidem*, p. 128.

133. Recogida por F. D'OSTILIO, *È pronto il nuovo C.J.C.*, Città del Vaticano 1982, p. 63.

2) Un voto de Alfonsus Stickler, Prefecto de la Biblioteca Vaticana, y 3) Un voto de Ioannes Beyer, Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Gregoriana»<sup>134</sup>. Una síntesis de las razones aducidas por aquellos cardenales ya la vimos en la *animadversio* n. 3. En ella se había pedido la supresión del c. 1373 § 2, la del final del c. 126, y la modificación del c. 244. También conocemos el parecer de Stickler en favor de la validez sustancial de esos cánones. Ahora corresponde a la Plenaria tomar una decisión.

### 5.2.1. *La decisión de la Plenaria*

Analizadas las afirmaciones de unos y otros, la respuesta a aquella primera cuestión quedó reflejada en los siguientes cambios:

1) En la parte del c. 126 relativa a los laicos se suprime la frase «quatenus eodem ordine sacro non innititur»; y, se introduce un «tamen».

2) En el c. 244 se sustituye «aut potestas regiminis ecclesiastici ordine sacro innixa» por «firmo praescripto c. 129».

3) En el c. 1373 § 2 desaparece la palabra «viri»<sup>135</sup>.

En el esquema 1982, fruto de esta última revisión, aparecerían con la siguiente numeración y redacción:

C. 129. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti; in exercitio eiusdem potestatis, christidifeles laici tamen eam partem habere possunt, quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.

134. J. E. LYNCH, *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, New York 1985, pp. 202-203.

135. Respecto a las votaciones acerca de estos cambios podemos decir que:

a) «It has been reported informally that by a vote of 52 out of 63 the commission members voted to permit the exercise of the power of governance by a lay person, including lay judges» (J. PROVOST, *The participation of the laity...*, cit., p. 433);

b) «Piace (59 su 61) che il testo del can. 273 sia: 'Soli clerici... potestas ordinis, firmo praescripto can. 129». Citado por U. BETTI, *In margine al nuovo Codice...*, cit., p. 638 (nota 25);

c) «The Plenarium not only retained the lay judge, but by a vote of thirty-six out of forty-eight it deleted the qualification *viri* from *viri laici iudices*, thus enabling women to be associate judges». (J. E. LYNCH, *The Code of Canon Law, o.c.*, p. 204).

C. 273. *Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis, firmo praescripto can. 129.*

C. 1421. § 1. *In dioecesi constituentur ab Episcopo iudices dioecesani qui sint clerici.*

§ 2. *Episcoporum Conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituentur, ex quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum.*

§ 3. *Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati.*

### 5.2.2. *Análisis de los cambios*

Quedaron suprimidas aquellas frases que, afirmando la posible existencia de una doble potestad de régimen —*innixa* y *non innixa* en el Orden—, habían sido ocasión de la mayor parte de las discusiones. Llegamos al punto que ofrece mayores dificultades de interpretación. Sabemos que en la *Relatio* se respondió a la petición de supresión del canon del juez laico (*vid.* apartado 5.1.2.) no considerando como definido por el Concilio el principio del origen sacramental de toda potestad de régimen. Ahora la cuestión radica en saber qué sentido ha de atribuirse a las expresiones *innixa* y *non innixa*. Por lo visto hasta el momento no todos los Consultores las entendían de igual manera<sup>136</sup>. Tales expresiones resultaban equívocas, y éste bien pudo ser el motivo de su supresión.

Los cánones ya modificados sólo tratan de una potestad, de la que también pueden participar los laicos. El modo en que la potestad se «funda» en el Orden sagrado queda sin precisar. Con respecto a esto se ha hecho notar: «Como es sabido, en la Plenaria de la Comisión en octubre de 1981, se escogió —a propósito— una fórmula

136. Así, para algunos Consultores y algunos miembros de la Comisión, entre ellos, J. Ratzinger (*vid.* apartados 5.1.1. y 5.1.2.); W. Bertrams (*vid.* apartado 3.1.1.); G. Damizia (*vid.* apartado 42.) el sacramento del Orden no es sólo el fundamento sino el origen de toda potestad (*innixa* significaría ambas cosas).

Para otros, como K. Mörsdorf (*vid.* apartados 2.2. y 3.1.1.) y W. Aymans (*vid.* apartado 5.3.) el Orden es fundamento de la potestad de régimen en cuanto que sólo los ordenados resultan ontológicamente capacitados para su ejercicio (*innixa* significaría fundada).

Los que defendían la posible participación del laico en el ejercicio de la potestad de régimen usaban las expresiones *innixa* y *non innixa* para expresar que no todo su ejercicio requiere necesariamente el Orden sagrado (*vid.* apartados 2.1., 2.3. y 3.1.1.).

de compromiso, bastante general, porque no se quería, al establecer una disposición canónica, prejuzgar la solución teórica de un problema y, todavía menos, cerrar la discusión entre especialistas»<sup>137</sup>.

El c. 129 establece que la potestad de régimen compete a los ordenados; éstos, son hábiles para gozar de ella en toda su extensión y como propia<sup>138</sup>. Esto no supone la inhabilidad absoluta de los laicos, ya que —*tamen*—, la autoridad suprema puede concederles, *singulis pro causis*, participar en ella.

El c. 273 reafirma lo anterior al establecer que quedan reservados *solis clerici* todos los oficios que requieran ejercicio de la potestad de orden y, *firmiter praescripto* c. 129, aquéllos que requieren ejercicio de la potestad de régimen. Es decir: se excluyen de la reserva los oficios atribuibles a laicos (y no cualquier clérigo podrá ejercer cualquier oficio de régimen).

El c. 1421 § 2 faculta a la Conferencia Episcopal para constituir jueces laicos (hombres y mujeres). Estos, y no *singulis pro causis* sino de modo estable y general, participan de la potestad de régimen.

La Comisión encargada de la reforma del Código había llevado a término su tarea. Al final de la Sesión Plenaria unánimemente se aceptó que el nuevo esquema surgido de ella fuera presentado al Sumo Pontífice.

## 6. REVISIÓN DEL ESQUEMA 1982

Es muy escasa la información que hemos conseguido acerca de esta última fase de elaboración del Código. En este breve apartado la presentaremos, y añadiremos —sin entrar a analizarlas— las dos grandes líneas interpretativas de las últimas modificaciones.

### 6.1. Intervención personal de SS. Juan Pablo II

La Plenaria de 1981 daba por concluidos, en su fase *consultiva*, los trabajos de revisión del Código. Faltaba todavía la aceptación de éstos por parte del Supremo Legislador: el Romano Pontífice.

137. R. CASTILLO LARA, *La communion ecclésiale dans le nouveau Code*, en «*Studia Canonica*», 17 (1983), p. 348.

138. El canon no distingue, explícitamente, entre Obispos, presbíteros y

El texto íntegro del Código, ya con los cánones de la LEF que debían en él incluirse<sup>139</sup>, se presentó al Papa el 22 de abril de 1982. Juan Pablo II «volle studiare personalmente lo *Schema novissimum*, ..., ed approfondire i problemi più rilevanti, coadiuvato da una commissione di esperti e da un'altra di qualificati Presuli, dedicandovi molte sessioni di lavoro collegiale»<sup>140</sup>.

Numerosos fueron los cambios surgidos de este último reconocimiento<sup>141</sup>; y, especialmente significativos los experimentados por los cánones que venimos analizando. El Sumo Pontífice, tras considerar todo con ponderación, decretó que se promulgará el nuevo Código el 25 de enero de 1983. Los cánones 129 y 273 (ya 274) presentaban una nueva redacción, ya definitiva. El canon 1421 permanecía igual.

C. 129. § 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti.

§ 2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt.

C. 274. § 1. Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici.

Es interesante señalar que en esta última fase de revisión el cardenal J. Ratzinger solicitó de nuevo la supresión de lo referente a los jueces laicos: «c. 1421 § 2 *Schema Nov ist zu streichen*»<sup>142</sup>. Sugirió

diáconos. La frase *ad normam praescriptorum iuris* podemos entenderla como reguladora de las diferencias que existen entre ellos.

139. Cfr. Comm., 16 (1984), pp. 91-99.

140. Palabras de R. Castillo Lara, recogidas por U. BETTI, *In margine al nuovo Codice...*, cit., p. 628.

La Comisión de expertos estaba compuesta por: Mons. Edward Egan, estadounidense; Mons. István Mester, húngaro; Mons. Zenon Grocholewski, polaco; P. Umberto Betti, italiano; Eugenio Corecco, suizo, y, los españoles P. Javier Ochoa y P. Luis Díez García (cfr. *ibidem*, p. 628, nota 4).

La Comisión de Prelados tenía por miembros a: Card. Agostino Casaroli, Secretario de Estado; Card. Joseph Ratzinger, Prefecto de la S. C. para la Doctrina de la Fe; Card. Narciso Jubany, Arzobispo de Barcelona; y, Mons. Vincenzo Fagiolo, Arzobispo de Chieti. (Cfr. *ibidem*, p. 628, nota 4).

141. En el trabajo de U. Betti se incluye una relación de los cánones introducidos como nuevos, los cánones suprimidos y aquéllos que presentan alguna modificación (cfr. *ibidem*, pp. 630-361).

142. Citadas por U. BETTI, *ibidem*, p. 636, nota 20.

también la posible separación en párrafos del c. 129; la redacción propuesta para el segundo era la siguiente: «In exercitio eiusdem potestatis ii, qui ordine sacro non sunt insigniti, suo modo ad norman iuris adiuuare et cooperari possunt»<sup>143</sup>. Como se ve, el parecido con el texto definitivo es grande pero no total: no se incorporarían ni el *suo modo* ni el *adiuuare*.

Nada hemos encontrado publicado sobre el modo en el cual el actual Prefecto de la S.C. para la Doctrina de la Fe solicitó, ya como miembro de la reducida comisión de Prelados, la modificación del entonces c. 273. Recordamos que en la *Relatio* de 1981 la redacción por él propuesta era ésta: «Soli clerici obtinere possunt officia, ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis (quae quidem semper est ordine sacro innixa)» (*vid.* apartado 5.1.1.). El texto definitivo la recoge textualmente, sin incluir el paréntesis.

## 6.2. Análisis de los cambios

Hemos querido limitar nuestro trabajo a la presentación de lo sucedido en la Comisión para la reforma del Código. Por esto, nos limitaremos a mostrar brevemente cómo los últimos cambios de los cánones hacen posible que las discusiones habidas en el seno de la Comisión sigan presentes en la actualidad. En efecto, en los primeros comentarios a la nueva legislación canónica encontramos dos grandes líneas de interpretación. Las resumimos de la siguiente manera:

1.<sup>a</sup>) Defiende la capacidad exclusiva de los ordenados para ejercer la potestad de régimen. Afirma que:

— La separación en párrafos del c. 129 expresa algo más que una mera cuestión técnica. Así, a la vista de lo establecido por el c. 1008 y el *soli clerici* del c. 274 § 1, el primer párrafo está afirmando la exclusiva y total habilidad de los ordenados para gozar de la potestad de régimen.

— Consecuentemente, el *cooperari* del párrafo segundo ha de entenderse como mera ayuda o colaboración, que en ningún caso comporta, por parte de los laicos, ejercicio de tal potestad. La sustitución de *singulis pro causis...* por *ad normas iuris*, esta última más

143. Citadas por U. BETTI, *ibidem*, p. 638, nota 25.

amplia, sólo se explica en razón del carácter esencialmente restrictivo del *cooperari*.

— El c. 1421 § 2, que parece estar en contradicción con lo anterior, está, por tanto, esperando una explicación doctrinal.

2.º) Defiende una limitada capacidad del laico para ejercer —cuando se le conceda— la potestad de régimen. Afirma que:

— El canon fundamental para determinar los sujetos de la potestad de régimen es el c. 129, inexistente en el antiguo Código. La redacción del primer párrafo, idéntica a la de la primera parte del c. 126 del esquema 1980, no expresa ahora lo que no expresaba entonces; es decir, una capacidad exclusiva y total de los ordenados.

— El contenido del c. 1421 § 2, innovación del Código, siempre se ha entendido como manifestación del ejercicio por parte del laico de la potestad de régimen. Esto, que viene reafirmado por los cánones 135 § 2 y 391 § 2, significa que el *cooperari possunt* del c. 129 § 2 incluye una cooperación que comporta ejercicio de tal potestad.

— De alguna manera habrá que resolver la posible contradicción que existe entre el c. 274 § 1 y el c. 1421 § 2.

## 7. CONCLUSIÓN

### 7.1. *Visión de conjunto*

El alcance de la participación del laico en el ejercicio de la potestad de régimen siguió, en la reforma codicial, un largo camino que podamos sintetizar en los siguientes puntos:

1. La doctrina canónica de los últimos siglos ha tratado la relación entre las potestades de orden y de jurisdicción, y las cuestiones referentes a su origen y naturaleza, de manera que se aceptaba una cierta separabilidad de ambas potestades. Se admitía comúnmente —sin que falten hechos históricos que lo demuestren— que no todo el ejercicio de la potestad de régimen exigía necesariamente gozar de la potestad de orden. En consecuencia parte del contenido del c. 118 del Código de 1917 era considerada como mero precepto de derecho eclesiástico. Apoyándose en ello y en la posibilidad establecida por el Concilio de que los laicos fueran asumidos para el desempeño de algunos oficios eclesiásticos, una fracción mayoritaria

de Consultores de la Pontificia Comisión para la reforma del Código consideró oportuno —desde los primeros trabajos preparatorios— modificar el mencionado c. 118, mostrándose partidarios de que, en el nuevo Código, se reconociera la posible participación del laico en el ejercicio de la potestad de régimen (*vid.* apartado 2).

2. Ya en aquellos primeros trabajos preparatorios —como a lo largo de toda la tarea de revisión— una minoría de Consultores se opuso al reconocimiento de una capacidad que consideraban inexistente en el laico. El c. 118 reflejaba, para ellos, un fundamental principio eclesiológico: el sacramento del Orden confiere a los ministros sagrados la capacitación ontológica (consagración-misión) para gobernar la Iglesia. La esencialmente diversa participación del laico en los *tria munera Christi* lo hace incapaz de tal tarea. En este sentido la jurisdicción presupone el Orden, formando con él una unidad (*sacra potestas*). Si en la Edad Media se había producido un oscurecimiento de la íntima unidad de ambas potestades, la doctrina conciliar de la *sacra potestas* permite superar —ya definitivamente según esta postura doctrinal— todo intento de separación entre orden y jurisdicción (*vid.* apartado 2).

3. Las razones aducidas por los partidarios de una y otra postura motivaron, en 1976, una consulta a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (*vid.* apartado 3). Sin que la respuesta fuera tan explícita como se esperaba, en el esquema de 1977 ya figuraban los cc. 96 y 128 que reconocían la posibilidad de que los laicos, cuando se les concediera, participaran en el ejercicio de la potestad de régimen. En conformidad con ellos el c. 20 del esquema «*De processibus*» de 1976 establecía la posible intervención de laicos en tribunales eclesiásticos.

4. Las discusiones no cesaron. La revisión del esquema de 1977, tenidas en cuenta las observaciones enviadas por los órganos de consulta, dejó invariados los cc. 96 y 128. Sólo el canon relativo a los jueces eclesiásticos sería modificado de manera que algunos laicos (*viri*) pudieran ser constituidos establemente como tales. De este modo se llegó a los cc. 126, 244 y 1373 del esquema 1980 (*vid.* apartado 4).

5. A este esquema se hicieron no pocas observaciones, que encontramos en la *Relatio* de 1981. La importancia de las relativas a los cánones objeto de nuestro estudio —se estaba cuestionando una interpretación de lo dicho por el Concilio— motivó la decisión de que fueran resueltas por la Plenaria de Cardenales. El resultado fue una modificación significativa de los cc. 126 y 244: quedaron suprimidas las expresiones «*quatenus eodem ordine sacro non innititur*» del c. 126 y

«*aut potestas regiminis ecclesiastici ordine sacro innixa*» del c. 244, que podían hacer pensar en una doble potestad de régimen, fundada y no fundada en el Orden sagrado. Sin embargo se seguía aceptando la posible participación del laico en el ejercicio de la potestad de régimen. En la Plenaria se incluyó también a la mujer como juez eclesiástico. La fase consultiva de los trabajos de revisión se cerraba con la presencia, en el último esquema, de los cc. 129, 273 y 1421 (*vid.* apartado 5).

6. Su Santidad Juan Pablo II quiso estudiar personalmente, con la ayuda de una doble comisión de expertos y consejeros, el esquema 1982. En esta última revisión —en la cual el Romano Pontífice mostró la solicitud que le es propia en cuanto Supremo Pastor de la Iglesia universal— fueron sustancialmente modificados los cc. 129 y 273. Con unas redacciones muy parecidas a las propuestas por el cardenal Ratzinger el nuevo c. 129, dividido en dos párrafos, no habla ya —al referirse al laico— de participación, sino de cooperación en el ejercicio de la potestad de régimen. El definitivo c. 274 § 1 reserva a los clérigos los oficios que supongan tanto ejercicio de la potestad de orden como de régimen. El canon del juez eclesiástico no experimentó, sin embargo, cambio alguno y constituye el actual c. 1421 (*vid.* apartado 6).

7. Las últimas modificaciones reclaman de la doctrina un esfuerzo por alcanzar una correcta interpretación conjunta de algunos cánones aparentemente contradictorios (especialmente los cc. 129, 135 § 3, 274 § 1, 1421 § 2). Al mismo tiempo hacen posible que las dos tendencias —siempre presentes en los trabajos de revisión— sigan defendiendo la validez de sus respectivas posturas (*vid.* apartado 6).

## 7.2. *Consideraciones finales*

No queremos concluir nuestro trabajo sin hacer unas breves reflexiones personales. En modo alguno pretendemos dar con ellas una acabada respuesta a tan controvertida cuestión. Deseamos simplemente resaltar la importancia de tres hechos, que en nuestra opinión ayudan a enfocar debidamente el problema, y expresar lo que esos hechos, ya en relación con los actuales cánones, nos sugieren.

1.º El 20 de noviembre de 1965, en la alocución inaugural de los trabajos de reforma, Pablo VI quiso señalar explícitamente que «los laicos carecen de la facultad de regir» (*vid.* apartado 4.1.).

2.º En 1971 se promulga el M.P. *Causas matrimoniales*. Todo parece indicar que constituye la aceptación por parte de Pablo VI

de una propuesta del *coetus* «*De processibus*». Así pues, este *motu proprio* no reflejaría sino el reconocimiento de la capacidad del laico para juzgar causas espirituales, actividad esta que siempre se ha entendido como ejercicio de la potestad de jurisdicción (*vid.* apartado 2.1.).

3.º En diciembre de 1976 la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, a la consulta de si los laicos podían —bajo la guía de los Sagrados Pastores— ser llamados a desempeñar oficios que llevan consigo participación en el ejercicio de la potestad de régimen y, en caso afirmativo, cuáles serían tales oficios, contestó diciendo que, dado el estado actual de la investigación doctrinal sobre esta cuestión, no podía dar una respuesta exacta. Sí señaló, no obstante, que los laicos quedaban —dogmáticamente— excluidos sólo de los oficios «intrínsecamente jerárquicos» para los que se requiere la recepción del Orden sagrado. La determinación y posible asignación de otros oficios —ya no intrínsecamente jerárquicos— a los laicos quedaba en manos de la Santa Sede (*vid.* apartado 3.1.3.).

Teniendo presentes estos hechos y sin olvidar la insistencia del Concilio por relacionar radicalmente la función de gobierno con el sacramento del Orden, nos parece necesario distinguir, en la realidad comprendida bajo la genérica expresión de «gobierno», dos niveles distintos cuyos límites no son nítidos ni fácilmente determinables en cada caso. Por una parte, un nivel fundamental, constitucional, «intrínsecamente jerárquico» al que sólo pueden acceder los ordenados. Por otra, un nivel de carácter más técnico y siempre de cooperación, en el que cabe, sin problemas teológicos, su desempeño por parte del laico.

En nuestra opinión, la dificultad principal radica en que la doctrina todavía no ha llegado a dar una respuesta satisfactoria al interrogante fundamental aquí planteado: se trata, en el fondo, de saber cuál es el fundamento de una y otra forma de «governar» en la Iglesia. Nos parece evidente que la respuesta tendrá que centrarse en la consideración del sacerdocio jerárquico o ministerial para el primer nivel y en la del sacerdocio común para el segundo. Una vez aclarado esto, será posible llegar a una más exacta delimitación de los dos niveles, y por otra parte encontrar una terminología capaz de expresar los distintos alcances y características que la potestad de régimen presenta en cada uno de los niveles.

Así, si nos movemos en un plano prevalentemente teológico y fundamental, es lógico afirmar —porque es indudablemente cierto— que el laico no puede gobernar la Iglesia: «carece de la facultad de

regir». Sin embargo, sin prescindir del dato teológico, en una perspectiva más jurídica que atiende a la concreta organización eclesial, no parece haber dificultad para afirmar que el laico puede realizar algún tipo de actividad que también se denomina de potestad de régimen.

A la luz de estas consideraciones y ya fijándonos en los cánones que hemos venido analizando, estimamos que el término *potestas regiminis* hace, en los cánones 129 § 1 y 274 § 1, especial referencia al nivel fundamental de gobierno en la Iglesia. En otros cánones, 129 § 2 y 1421 § 2, estaría refiriéndose al segundo de los niveles mencionados.

Antes de concluir, queremos señalar que la dificultad de nuestra cuestión viene acrecentada por la existencia de dos diversas maneras de conceptualizar la potestad de régimen. Una primera, prevalentemente teológico-eclesiológica, se caracteriza tanto por el tratamiento unitario de la potestad, como por la afirmación del fundamento y origen sacramental de la misma. En esta perspectiva, la potestad de gobernar, que queda inseparablemente unida al orden sagrado, sólo requiere para ser jurídicamente ejercitable —«*ad actum expedita*»— que se añada la determinación canónica. Por otra parte, existe una segunda conceptualización —prevalentemente jurídica— de la potestad de régimen, en la que se reserva este término para designar exclusivamente la potestad de gobierno ya ejercitable: la «potestad» de regir recibida por el sacramento del Orden —aun no *expedita* por la falta de la determinación canónica— no es la tradicional *potestas iurisdictionis*.

En definitiva manteniendo firme el principio de la existencia de una única potestad de régimen, todo el problema se centra en la distinción de los dos niveles de su ejercicio y en encontrar una forma de expresar —también terminológicamente— su diversidad, ya de nivel, ya de conceptualización. La tarea, que no es sencilla —nos encontramos ante el mismo misterio de la Iglesia— requiere el estudio conjunto de historiadores, teólogos y canonistas. «La relación íntima entre derecho canónico y teología se plantea con urgencia; la colaboración entre canonistas y teólogos debe hacerse más íntima; ningún ámbito de la revelación puede permanecer ignorado, si se quiere expresar y profundizar el misterio de la Iglesia, cuyo aspecto institucional ha sido querido por su Fundador y pertenece por su esencia a su carácter fundamentalmente sacramental»<sup>144</sup>.

144. Pablo VI, *Discurso* del 17-IX-1973. Comm., 5 (1973), p. 124.



### 7.3. Cuadro esquemático de las modificaciones de los cánones

#### SCHEMA 77

C. 96. Potestatis regiminis in Ecclesia, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt, qui ordine sacro sacro sunt insigniti; in exercitio eiusdem potestatis, quatenus quidem eodem ordine sacro non innititur, ii qui ordine sacro non sunt insigniti eam tantum partem habere possunt quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.

C. 97 (CIC 196). Potestas regiminis, etiam potestas iurisdictionis vocata, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia...

C. 98 (CIC 197 et 200 § 2) § 1. Potestas regiminis ordinaria est quae ipso iure alicui officio adnectitur; delegata quae ipsi personae non mediante officio conceditur.

§ 2. Potestas regiminis ordinaria potest esse sive propria sive vicaria.

§ 3. Ei qui delegatum se asserit, incumbit onus probandae delegationis.

#### SCHEMA 80

—Se introduce el comienzo del c. 97 (1977).

—Se sustituye «*ii qui ordine sacro non sunt insigniti*» por «*Christifideles laici*».

—Desaparece «*tantum*».

#### SCHEMA 82

—Desaparece «*quatenus eodem ordine sacro non innititur*».

—Se introduce *tamen*, a continuación de *laici*:

C. 129. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti; in exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici tamen eam partem habere possunt, quam singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit.

C. 131. Sin cambios.

#### CIC 83

C. 129 § 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti.

§ 2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt.

C. 131. Sin cambios.



#### SCHEMA 77

C. 100 § 1. Potestas regiminis, rationi muneris fungendi ad quod ordinatur, distinguitur legislativa, executiva et iudicialis.

C. 102 § 1. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, delegari nequit, nisi quatenus aliud iure explicitè caveatur.

§ 2. Potestas iudicialis, qua vi ipsius iuris aut ex speciali Summi Pontificis commissione gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuius decreto aut sententiae praeparatorios perficiendos.

§ 3. Ad potestatis executivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur.

C. 128 (CIC 118). Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici ordine sacro innixa.

#### SCHEMA 80

C. 132 § 1. Potestas regiminis distinguitur legislativa, executiva et iudicialis.

§ 2. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem supremam, delegari nequit, nisi aliud iure explicitè caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria ferri nequit.

§ 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia iudicialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari nequit, nisi ad actus cuius decreto aut sententiae praeparatorios perficiendos.

§ 4. Ad potestatis executivae exercitium quod attinet, serventur praescripta canonum qui sequuntur.

C. 244. Sin cambios.

#### SCHEMA 82

C. 135. Un único cambio de importancia: en el § 2 se añadió *valide* delante de *delegari* y delante de *ferri*.

C. 273. Se sustituye «*aut potestas regiminis ecclesiastici ordine sacro innixa*» por «*firmiter praescripto c. 129*».

#### CIC 83

C. 135. Sin cambios.

C. 274. § 1. Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici.



#### SCHEMA 77

S. 244 § 1. Episcopo dioecetano officium est ius regendi Ecclesiam particularem sibi commissam tum in spiritualibus tum in temporalibus, ad normam iuris.

§ 2. Ipsi omnis competit quae ad regimen dioecesis requiritur potestas, tum legislativa, tum executiva et iudicialis, iis exceptis in causis quae ad normam iuris auctoritati Ecclesiae supremae reservantur.

§ 3. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus sive in Synodo dioecetana sive extra eandem; potestatem executivam exercet sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales, ad normam iuris; potestatem iudicalem sive per se sive per Vicarium iudicalem et iudices ad normam iuris constitutos.

#### SCHEMA 80

C. 358 § 1. Episcopi dioecetani est Ecclesiam particularem sibi commissam cum potestate legislativa, executiva et iudiciali regere, ad normam iuris.

§ 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potestatem executivam exercet sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales; potestatem iudicalem sive per se sive per Vicarium iudicalem et iudices ad normam iuris.

#### SCHEMA 82

C. 391. Sin cambios.

#### CIC 83

C. 391. Sin cambios.



#### SCHEMA 77

C. 190 (CIC 948). Sacramento Ordinis ex Christi institutione inter Christifideles quidam, caractere perenni quo signantur, constituuntur sacri ministri seu clerici qui nempe eodem consecrantur et deputantur ut in persona Christi munera adimplentes Evangelium annuntiandi, Christifideles regendi et divinum cultum celebrandi, Dei Populum pascant.

C. 20 (CIC 1574) § 1. In dioecesi constituentur ab Episcopo iudices dioecesiani qui sint clerici. Necessitate suadente potest Conferentia Episcopalis permittere ut collegium iudicans constet ex uno viro laico et ceteris clericis.

§ 2. Iudices sint integrae famae et in iure canonico periti.

#### SCHEMA 80

C. 961. Sacramento Ordinis ex divina institutione inter Christifideles quidam, caractere indelibili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe eodem consecrantur et deputantur ut, por suo quisque gradu, in persona Christi Capitis munera adimplentes Evangelium annuntiandi, Christifideles regendi et divinum cultum celebrandi, Dei Populo pascant.

C. 1373 § 1. In dioecesi constituentur ab Episcopo iudices dioecesiani qui sint clerici.

§ 2. Episcoporum Conferentia permittere potest ut etiam viri laici iudices constituentur, ex quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum.

§ 3. Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiatii.

#### SCHEMA 82

C. 1008. Hay cambio de re-dacción, no sustanciales.

C. 1421. Desaparece *vir*.

#### CIC 83

C. 1008. Sin cambios.

C. 1421. Sin cambios.

